

40 AÑOS
en defensa del
MARXISMO



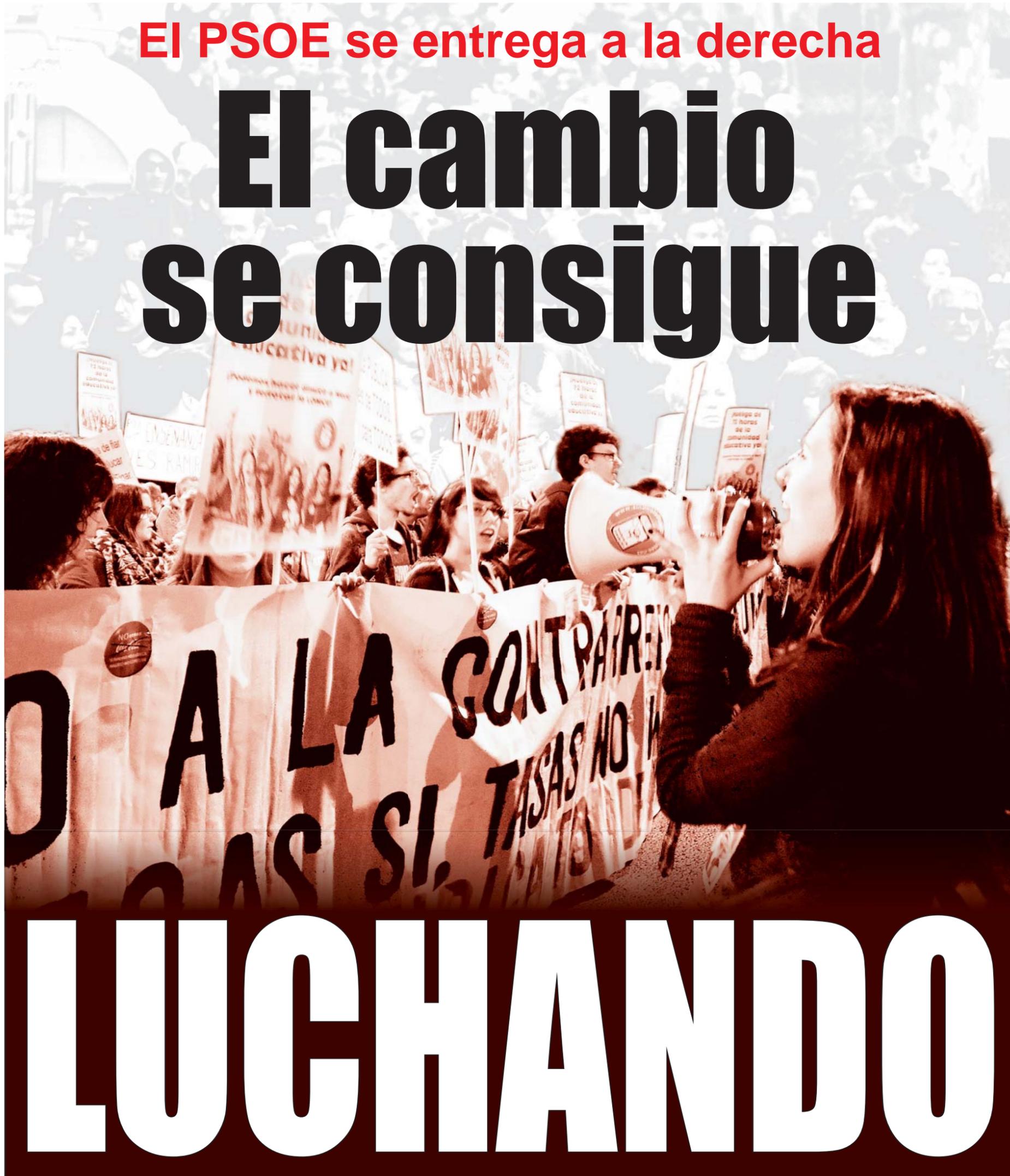
CORRIENTE MARXISTA REVOLUCIONARIA

Donación: 1,50 euros
Ayuda: 2 euros

Núm. 302 • MARZO • 2016

El PSOE se entrega a la derecha

El cambio se consigue



LUCHANDO

Editorial, págs. 10 y 11



Huelga de estudiantes ▶ 13 y 14 de abril

contraportada

Las simpatías por el socialismo crecen entre Bernie Sanders provoca un

María Castro

Cuando el 30 de abril del pasado año Bernie Sanders anunció oficialmente su participación en las elecciones primarias, las encuestas daban a Hillary Clinton cincuenta puntos de ventaja y nadie dudaba de su triunfo. Diez meses después, concretamente el 9 de febrero de 2016, Sanders lograba una victoria contundente en las primarias de New Hampshire, con un 60% de los votos frente al 39% de Clinton. ¡Veinte puntos de ventaja!, la mayor diferencia en sesenta años. Como ocurrió anteriormente en Iowa, la participación fue la más alta en décadas y, una vez más, Sanders arrasó entre los menores de 30 años con el 85% de los votos, y entre los votantes de la clase obrera, con un 65%. Hasta ahora se han celebrado primarias en 15 de los 50 estados de la Unión y la participación ha caído un 32% respecto a 2008. Clinton ha ganado en los estados donde la participación ha caído entre un 20% y un 50%, fundamentalmente en los estados del sur. Mientras Sanders vence en los estados donde aumenta la participación o se mantiene en el mismo nivel que en 2008. Los resultados demuestran la división entre los estados más industriales, donde se concentra una parte importante de la clase obrera y en los que Sanders gana con clara diferencia, mientras Clinton arrasa en el sur del país, estados más atrasados y con mayoría de población negra. La irrupción de Bernie Sanders, que ha convulsionado el escenario político estadounidense, es mucho más que un accidente. Refleja el proceso de polarización social y la radicalización hacia la izquierda de millones de trabajadores y jóvenes estadounidenses.

¿Quién es Bernie Sanders?

En su juventud fue un destacado activista por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. Candidato al senado en 1972 y 1975 de Liberty Union, un partido formado por pacifistas de izquierdas que se oponían a la guerra, en 1981 fue elegido alcalde de Burlington, la capital del estado de Vermont, y en 1990 se convirtió en el primer senador independiente en cuarenta años. Defendió la revolución sandinista y denunció la guerra sucia de la administración Reagan en Centroamérica durante los años ochenta, y más tarde manifestó públicamente su oposición a la intervención imperialista en Iraq. En numerosas ocasiones ha votado en contra de los recortes sociales y los ataques a los derechos democráticos que se han realizado estos últimos años en nombre de la lucha contra el terrorismo yihadista, como es la *Patriot Act*.

Sanders se define como un “socialista democrático”, admirador del histórico dirigente socialista norteamericano Eugene V. Debs, quien en 1920 se presentó a las elecciones presidenciales mientras estaba en prisión acusado de sedición por su oposición a la Primera Guerra Mundial y que consiguió casi un millón de votos. Precisamente muchos pensaban que aparecer con la etiqueta de “socialista” le cerraría muchas puertas, porque durante décadas la clase dominante norteamericana ha recurrido al anticomunismo más agresivo para intentar desacredi-

tar y criminalizar a cualquier oposición de izquierdas (apoyándose en el ejemplo negativo de los regímenes estalinistas de Europa del Este). Pero la realidad ha sido muy diferente.

La campaña de Sanders ha sabido traducir en un lenguaje comprensible las aspiraciones de millones de trabajadores y jóvenes estadounidenses, atacando frontalmente a la oligarquía financiera que controla los resortes del poder político con puño de hierro. La fórmula que ha sintetizado todo ese conjunto de anhelos es el llamamiento de Sanders a una “revolución política” para EEUU: “La forma de conseguirla”, afirmó Sanders el 3 de febrero en un mitin en Des Moines (Iowa), “es que millones de norteamericanos se pongan en pie y digan ¡basta ya! (...) una revolución contra los multimillonarios y oligarcas que han secuestrado el sistema político (...) Lo que decimos a Wall Street es que la clase obrera de este país está enferma y cansada de trabajar largas jornadas a cambio de bajos salarios”.

Sanders defiende el aumento del salario mínimo federal a 15 dólares la hora, el establecimiento de un sistema médico público digno y universal, o que la regulación de la baja médica, permisos de maternidad y vacaciones no la decidan las empresas. También ha sido explícito en demandar una enseñanza universitaria gratuita, poniendo fin a un sistema perverso que obliga a los estudiantes a endeudarse con los bancos de por vida y que excluye a millones de jóvenes provenientes de familias trabajadoras; ha abogado por la recuperación de los derechos laborales y sindicales perdidos estos últimos años, por el incremento de las pensiones y el aumento de los impuestos a los más ricos y las grandes empresas. Defiende el derecho al aborto y poner fin a la impunidad de la violencia policial y el reguero de asesinatos de jóvenes afroamericanos en las calles, una auténtica matanza legalizada por el sistema judicial

El movimiento obrero y los sindicatos

Desde el principio, Sanders ha rechazado las donaciones millonarias de grandes empresas y *lobbies*. Anunció que sólo se financiaría con pequeñas donaciones: hasta ahora ha recaudado 73 millones de dólares, más que cualquier otro candidato a excepción de Clinton, que ha logrado 108,9 millones de dólares. La diferencia fundamental es que casi tres cuartas partes de lo conseguido por Sanders son aportaciones de 200 dólares o menos, con un donativo medio de 47 dólares. Por ejemplo, ha obtenido 16 millones de dólares procedentes de más de 235.000 parados o jubilados. Los trabajadores de Google han contribuido con 95.000 dólares, los de Microsoft con 27.000 dólares y los empleados de la Universidad de California han aportado 40.000 dólares, y así se podrían poner cientos de ejemplos.

No menos impresionante son las decenas de miles de personas que colaboran de manera voluntaria en la organización de la campaña. Se han creado miles de comités de apoyo a Sanders por todo el país, abarcando especialmente a jóvenes, mujeres, afroamericanos, inmigran-



tes, activistas sociales y comunitarios o sindicalistas. Muchas ciudades nunca antes habían visto mítines tan masivos como los que ha convocado Sanders: 5.500 personas asistieron en Denver, 11.000 en Phoenix, 13.000 en Tucson, 10.000 en Madison, 13.000 en Dallas, 15.000 en Seattle, 24.000 en Boston, 27.000 en Los Ángeles, 28.000 en Portland y miles más en otras localidades. En total ya han asistido a sus actos públicos más de 400.000 personas, que han tenido que aguantar durante dos y tres horas en largas colas, incluso bajo la nieve y el frío, para poder escucharlo.

La campaña de Bernie Sanders ha provocado un terremoto en el movimiento sindical: Hillary es la preferida del aparato (cuyos máximos representantes son

ardientes defensores de la política de paz social y colaboración de clases) mientras que Bernie lo es de la base y los activistas. En todo caso Sanders cuenta ya con el apoyo de cuatro sindicatos nacionales: CWA (telecomunicaciones), APWU (correos), NNU (enfermeras) y UEW (electricistas). También le respaldan al menos 40 sindicatos de los diferentes estados de la Unión, y cientos de organizaciones de izquierda, entidades civiles, asociaciones feministas y de todo tipo, como Labor for Bernie Sanders, que agrupa a más de 10.000 sindicalistas, Working Families Party, una coalición de sindicatos y organizaciones comunitarias, o MoveON, que cuenta con 8 millones de afiliados dedicada a la defensa de los derechos democráticos.

Se extienden las movilizaciones obreras en Argentina

Se puede parar a Macri

Miguel Ángel Domingo

Como venimos explicando en los últimos números de EL MILITANTE, la victoria electoral del derechista Mauricio Macri, aunque por la mínima, iba a ser utilizada como punta de lanza por la oligarquía argentina y el imperialismo norteamericano en varios frentes: en el interior, para acabar con las reformas sociales puestas en marcha por los gobiernos kirchneristas y doblegar a la clase obrera, acabando con cualquier conquista de esta década para volver a ser "competitivos" (es decir, trabajar más y cobrar menos); en el exterior, unido a la victoria electoral de la contrarrevolución en Venezuela, para convertir a Macri en una bandera de la derecha latinoamericana que ayude a derrotar la revolución bolivariana.

Desde el mismo día de su toma de posesión esto ha sido así. A pesar de intentar ofrecer una ridícula cara amable, sus "buenas" intenciones se han concretado en decenas de miles de despidos en el sector público (que ya están animando a miles de despidos también en el sector privado), una inflación que se ha disparado hasta el 30% interanual, aumento de precios del transporte, *tarifazos* en el gas (en torno a un 250%) y especialmente sangrante el caso de la luz, con una subida que llega al 700% en el área metropolitana de Buenos Aires...

El carácter del nuevo gobierno no solo ha quedado claro en el terreno de los recortes y despidos; también ha mostrado su cara en cuanto a los derechos democráticos. A los nombramientos como cargos públicos de personajes ligados a



la dictadura y a la liberación de 10 torturadores, se sumó enseguida el rápido cambio en la actuación de la policía en las manifestaciones: en una protesta el 8 de enero contra 4.500 despidos del sector público en La Plata, una mujer recibió nueve impactos de balas de goma en la espalda; ocho días después fue detenida la activista Milagro Sala, por organizar una acampada de protesta. En este marco, el gobierno ha aprobado el conocido como *protocolo antipiquetes*, para reprimir cualquier intento de utilizar los cortes de vías de comunicación, método de lucha que se ha venido utilizando en los últimos quince años.

Con más de 25.000 despidos sobre la mesa, el sindicato del sector público ATE

convocó un paro nacional el 24 de febrero, con una manifestación en la Plaza de Mayo de Buenos Aires que reunió a más de 25.000 trabajadores del sector público, de empresas en lucha, de organizaciones de la izquierda..., en una impresionante demostración de fuerza frente al nuevo gobierno. A pesar de los numerosos cortes en los accesos a la ciudad, el gobierno no pudo estrenar su flamante *protocolo*. En el resto del país decenas de miles más salieron a la calle en una de las movilizaciones más grandes de los últimos años.

Por otro lado, están en marcha las paritarias (negociación colectiva), en las que los sindicatos han propuesto un aumento del 40% para hacer frente a la infla-

ción. El gobierno está presionando para que se quede en el 20-25%. En la enseñanza, se arrancó el compromiso del Ministerio de una subida del 40%. El propio Macri intervino para advertir que no habría aumentos de más del 25%. En al menos ocho provincias, los profesores están en pie de guerra, con huelgas de hasta 72 horas, y diferentes gobiernos provinciales están ofreciendo subidas salariales de hasta el 34%, sin haber logrado aún frenar la movilización.

Las condiciones para una respuesta unificada están dadas. La disposición a la lucha del movimiento está más que demostrada, ha salido a la calle desde el primer día de ataques de Macri. La izquierda argentina tiene una responsabilidad en estos momentos, en concreto el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Es fundamental una orientación a las masas obreras que se encuadran en la izquierda peronista y también a los sindicatos, ofreciendo una alternativa de lucha unida para hacer frente a la burocracia sindical, en la que se está basando el gobierno para intentar desactivar las movilizaciones.

Hay que extraer las lecciones de estos últimos quince años de experiencias revolucionarias en América Latina, y también en Argentina, empezando por algo tan cercano como las elecciones que ha ganado Macri, en las que el FIT llamó al voto en blanco planteando que el kirchnerismo y Macri eran lo mismo. Lo equivocado de esta idea es algo que amplias capas de las masas han podido comprobar en pocas semanas. Una oportunidad para dar un paso adelante en este sentido será el próximo 24 de marzo, cuando se celebrará una movilización masiva para conmemorar el 40° aniversario del golpe militar.

La reacción quiere que Macri sea su bandera en Latinoamérica; haciéndole frente, la clase obrera argentina puede convertirse en la punta de lanza del movimiento en todo el continente.

Duras perspectivas para la economía rusa

Tohil Delgado

Por segundo año consecutivo Rusia cerró su ejercicio económico con un importante déficit y el anuncio de nuevos recortes sociales. El PIB cayó un 3,7% en 2015, la pobreza se ha incrementado un 11%, 2,3 millones de personas más en solo doce meses.

La contracción económica se ha llevado por delante decenas de miles de puestos de trabajo. La empresa automovilística AvtoVaz, con un recorte del 20% de su plantilla, es un ilustrativo ejemplo, pasando de 52.000 empleados a 47.000. Los despidos masivos de médicos y pedagogos también han sido generalizados el año pasado como resultado de la unificación de centros de salud y educativos por todo el país. Hay una caída generalizada de los sueldos, de un 10% entre octubre de 2014 y el mismo mes de 2015, y de hasta un 30% en el caso de los maestros. Las exiguas pensiones subirán un 4% en 2016 cuando la previsión de inflación está entre el 8 y el 12,8%.

En este contexto el gobierno ruso ha aprobado unos imposibles presupuestos para 2016 que pretenden mantener la inversión dedicada a defensa y seguridad en un estratosférico 32% del PIB,



al tiempo que continúan esquilmando los magros recursos destinados a Educación y Sanidad, que descienden del 4,08% al 3,59% del PIB, y del 3,43% al 3,05% respectivamente.

Crisis, recortes y tensión militar

Estos presupuestos se han elaborado previendo que el barril de petróleo estuviera en torno a 50 dólares, cuando en enero ya estaba por debajo de los 28. Teniendo en cuenta que el 40% de los in-

gresos presupuestarios dependen de la exportación del crudo, un nuevo recorte de los gastos sociales era algo cantado. A finales de enero se aprobó un recorte presupuestario adicional del 10%, así como la privatización de empresas estatales, entre ellas una petrolera y el mayor banco del país.

Ante este panorama la decisión del Kremlin ha sido desviar la atención doblando su intervención militar en el extranjero. Pero eso trae, a su vez, nuevas complicaciones económicas. El derribo en noviembre de un caza ruso, de

misión en Siria, por parte de la aviación turca llevó a Putin a prohibir la importación de productos turcos, lo que paralizó parte del sector del automóvil y la fabricación de electrodomésticos en Rusia, ya que muchos de los componentes utilizados en estos sectores provienen de Turquía.

Respecto a su participación en la guerra de Ucrania las sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos también tienen importantes consecuencias. Los sectores más dañados son la banca, las empresas de energía, las de defensa y las dedicadas a la importación y exportación de armas.

Rusia busca alguna alternativa mirando al mercado chino. Se ha embarcado en grandes proyectos de infraestructura para llevar su petróleo a esta zona del mundo. Sin embargo, el bajo precio del crudo está poniendo en riesgo las inversiones ya realizadas.

Las tensiones se acumulan en todos los frentes sin otra perspectiva bajo el capitalismo que la descomposición social, el militarismo y la represión, pero también alimentan las condiciones para la única salida favorable a la mayoría: una explosión social a gran escala que se lleve por delante al régimen de Putin.

La revolución venezolana y las medidas de emergencia del presidente Maduro

Corriente Marxista Revolucionaria
Venezuela

El 18 de febrero el presidente Nicolás Maduro anunciaba varias decisiones de emergencia económica, entre las que destacan subir los precios de toda una serie de productos y servicios (entre ellos el de la gasolina), incrementar el Impuesto Sobre la Renta (ISRL), y pasar el llamado “cambio protegido” de 6,30 a 10 bolívares por dólar (este cambio afecta fundamentalmente a las importaciones de productos de primera necesidad como medicamentos y alimentos básicos), estableciendo un cambio flotante para el resto de mercancías y transacciones en 202 bolívares por dólar. En un contexto económico muy difícil, las medidas han sido presentadas como “las únicas posibles” para estimular la producción, aumentar los ingresos del Estado y ahorrar gastos. Pero, ¿son realmente estas decisiones las que se necesita para fortalecer la revolución y atajar el boicot económico? ¿Serán un paso adelante en la lucha contra el desabastecimiento y la corrupción? ¿De verdad beneficiarán a los trabajadores o serán aprovechadas por los capitalistas para seguir especulando?

Junto a estas medidas económicas de carácter general, Maduro anunció una reorganización de la Misión Alimentación, que engloba al conjunto de empresas y organismos públicos encargados de distribuir alimentos a la población. Durante las últimas semanas gerentes de varias de estas empresas han sido detenidos y permanecen encarcelados acusados de beneficiarse con el desvío de productos hacia el mercado paralelo, entre ellos el presidente nacional de la Red de Abastos Bicentenario, red de supermercados e hipermercados nacionalizada por Chávez en 2009 que engloba a 9.000 trabajadores. Esta reorganización, según han planteado cargos del Ministerio de Alimentación a los trabajadores, pasa por unificar Abastos Bicentenario con MERCAL y PDVAL (otras redes menores cuyos trabajadores tienen peores derechos y salarios), cerrar tiendas que no se consideran rentables (ya hay varias cerradas en estos momentos), convertir los supermercados e hipermercados en centros de acopio que abastecerían operativos a cielo abierto y mercados comunales en los barrios, y cerrar los centros de trabajo los domingos (el día que más gente acude a comprar y que se paga como doble, lo que significaría una reducción de salario).

Las relaciones de propiedad capitalista siguen sin cuestionarse

Como marxistas que luchamos por la revolución socialista en Venezuela, tenemos la obligación de señalar que las medidas anunciadas siguen sin dirigirse contra el problema central que atenaza a la economía venezolana. La inflación, la especulación, el desabastecimiento, el robo y la corrupción están directamente relacionados con la permanencia de la propiedad capitalista de las fábricas, los bancos y la tierra. Ninguna de las medidas anunciadas significa un paso al frente para acabar con estas relaciones de propiedad y, en todo caso, tendrán el efecto de cargar la actual crisis de la economía sobre las espaldas del pueblo trabajador bolivariano. Veamos por qué.

¿Qué efectos tendrán y a quién benefician?



Los principales beneficiarios del “cambio protegido” seguirán siendo los empresarios: la concesión de más divisas a precios favorables les permitirá seguir saqueando la renta petrolera y amasar grandes fortunas especulando con los precios y los dólares, como han hecho todos estos años. Cuando la economía (entre 2004 y 2008) crecía un 8 o 10% anual y recibían ayudas públicas abundantes, realizaron una huelga salvaje de inversiones y solo utilizaban entre un 42 y un 52% de la capacidad productiva instalada en sus empresas (datos de Conindustria). En lugar de producir, la burguesía especula y llena sus cuentas corrientes en el extranjero, una situación que se prolonga escandalosamente en la actualidad. Pero el gobierno no sólo no ha procedido a la expropiación de esta clase de parásitos, sino que dedica un porcentaje cada vez mayor de los ingresos petroleros a importar productos básicos, que hay que pagar a precios del mercado mundial y en divisa fuerte (dólares o euros), contribuyendo así al incremento de la inflación y el endeudamiento.

Otras medidas anunciadas, como el aumento del precio de la gasolina, al mantenerse la propiedad de las empresas en manos capitalistas empujarán a un alza generalizada de precios. Esto se une a que el gobierno, en la práctica, está aceptando subidas de precios en numerosos productos que no se compensan con los aumentos salariales; y la situación empeora porque tras la última subida salarial, y teniendo en cuenta lo que se han incrementado las unidades tributarias, muchos trabajadores que antes no estaban obligados a pagar el ISLR ahora sí tendrán que hacerlo. Todo esto reduce aún más el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esto no resolverá ningún problema y sólo puede debilitar el apoyo a la revolución, facilitando los planes de la derecha.

Aunque la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT) ha apoyado las medidas, entre sectores de las ba-

ses revolucionarias han causado inquietud y sorpresa. En Abastos Bicentenario los trabajadores ya han convocado movilizaciones exigiendo que se abran los libros de cuentas y se investigue a los altos cargos (empezando por el Ministerio de Alimentación); que se haga efectiva la elegibilidad y revocabilidad de estos puestos de responsabilidad (medidas de control democrático); y que la austeridad se aplique a estos gerentes (que hoy cobran 10 y hasta 15 veces más que un trabajador de la empresa). Junto a estas demandas revolucionarias básicas piden también que no se clausuren tiendas, ni se recorten derechos y salarios como ocurriría cerrando el domingo.

La economía y el Estado deben estar bajo administración directa de los trabajadores

La clase obrera con su instinto apunta claramente a la solución. Si se quiere cortar de raíz con la locura inflacionaria, con la especulación de las divisas y el negocio de estos parásitos, hay que tomar medidas socialistas claras y comprensibles para la población, y que serían completamente eficaces en esta situación de emergencia económica. El gobierno debería decretar el monopolio estatal del comercio exterior, ejercer directamente de intermediario en el mercado mundial, y acabar con todas las prácticas comerciales y especulativas de carácter parasitario que engordan los beneficios de la burguesía, de las multinacionales imperialistas y de un sector de burócratas corrompidos hasta la médula. Para que este monopolio funcione y no ocurra como con CENCOEX (el organismo público que hasta ahora se encarga de controlar la entrega de divisas por parte del Estado) debe estar dirigido por los trabajadores y el pueblo y no por funcionarios al margen de este.

Los banqueros y empresarios han obtenido beneficios récord todos estos años

aprovechándose de las políticas de redistribución de la riqueza y gasto público del Estado, así como especulando con las divisas. Pero, ¿cuántas empresas y puestos de trabajo han creado? ¡Ninguno! Los enormes recursos existentes en los bancos, que son resultado de explotar la riqueza petrolera y nuestra fuerza de trabajo, deben estar en manos del pueblo, nacionalizarse y destinarse a poner en marcha un plan de reactivación productiva —tanto en la industria como en la agricultura— gestionado no por burócratas sino por los propios trabajadores y el pueblo. Por supuesto, estas medidas de expropiación económica y de monopolio estatal, nacionalización de los bancos, las grandes empresas y las tierras bajo control obrero, permitiría combatir la corrupción y la especulación y dar los pasos imprescindibles hacia una economía socialista planificada. Los libros de cuentas de todas las empresas deben ser abiertos a la inspección de los trabajadores para ver qué gastos son aceptables y cuáles no, y todos los cargos públicos (empezando por los más altos), además de ser elegibles y revocables, deben ver rebajados sus salarios y cobrar lo mismo que un trabajador cualificado. Esto reforzaría enormemente la moral de las masas y el apoyo al proceso revolucionario.

Las medidas económicas, obviamente, no pueden ir al margen de las políticas. Este programa sólo será posible aplicarlo con la movilización del pueblo y de un Estado verdaderamente revolucionario dirigido no por burócratas, no por parlamentos controlados por la burguesía, sino por el poder revolucionario de los trabajadores y los oprimidos de Venezuela. Igual de importante que un programa económico genuinamente socialista, es construir el poder socialista a través de la Asamblea Revolucionaria de delegados trabajadores, campesinos y soldados elegibles y revocables. Es urgente recuperar el rumbo socialista de Chávez. La crisis deben pagarla los capitalistas y burócratas, no los trabajadores.

Quinto aniversario de la Primavera Árabe

Ni el imperialismo ni la contrarrevolución logran apagar la lucha

Ulises Benito

Se cumplen cinco años de la llamada primavera árabe o, para ser más exactos, del impresionante movimiento revolucionario que derribó a las todopoderosas dictaduras de Túnez, Egipto y Libia, y que empujó a la juventud, a los trabajadores y a otros sectores sociales oprimidos con una fuerza inusitada también en países como Siria, Yemen, Bahrein, y en todo el mundo árabe. Mucho se ha escrito al respecto, en la mayoría de los casos para desacreditar la lucha de las masas y responsabilizar al movimiento revolucionario del surgimiento del monstruo yihadista. Es hora de limpiar estas infamias y subrayar que, a pesar de la ofensiva del imperialismo y de la contrarrevolución, la lucha de las masas árabes sigue viva.

Los portavoces del imperialismo occidental, de la socialdemocracia, y de no pocos sectores del viejo estalinismo, han despachado la revolución árabe de una manera cínica ocultando su auténtica naturaleza. Sobre la sangre de miles de luchadores, encarcelados y asesinados, han vertido las calumnias más grotescas. Como si la guerra civil que asola Siria y desestabiliza todo Oriente Medio, la intervención del ejército saudí en Yemen y Bahrein, el caos en Libia, la dictadura militar egipcia o la barbarie del yihadismo, fueran la continuación natural de la revolución y no su contrario, es decir, la contrarrevolución. Son precisamente las potencias occidentales, y las oligarquías árabes que sostuvieron las dictaduras, las que han ahogado las ansias de justicia social del pueblo, haciéndolos pagar su

osadía con la destrucción de países enteros, y transmitiendo una dura advertencia a todos los explotados del mundo.

No se puede ocultar que la realidad actual es dramática para los trabajadores y jóvenes árabes. En muchos aspectos es peor que hace cinco años. El caso más grave, la guerra en Siria. No sólo ha causado millones de refugiados y cientos de miles de muertos, la intervención de las potencias imperialistas ha conseguido dividir a la población, creando separaciones sectarias aparentemente insalvables. En Egipto, el movimiento se enfrenta actualmente a una represión salvaje. En Túnez, el 82% del préstamo del FMI (concedido a cambio de duros recortes) está destinado al pago de la deuda contraída por el dictador Ben Alí, y el paro es más alto que entonces. Pero a pesar de todas las adversidades, la llama de la rebelión sigue viva y tiende a expresarse siempre que encuentra un cauce.

El movimiento revolucionario

El aspecto decisivo que inclinó la balanza en la caída de Mubarak y Ben Alí fue precisamente el más silenciado por la prensa burguesa: el papel de la clase obrera. La acción enérgica de los trabajadores en Egipto, el inicio de una serie de ocupaciones de fábricas y de creación de comités, y la convocatoria de una huelga general indefinida hasta la defenestración de Mubarak, fueron determinantes. En ese momento la burguesía egipcia, el imperialismo estadounidense y la cúpula militar, vieron las orejas al lobo y sacrifi-

caron definitivamente al viejo dictador, con el fin de no perderlo todo. Durante el período inmediatamente posterior, tuvieron que sudar tinta para conseguir mantener el control con un gobierno mínimamente estable, dada la fuerza de lo que allí llaman “la calle árabe”.

En Túnez se produjo una explosión de la juventud desocupada, que arrastró a los sectores decisivos de la clase obrera organizados en la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT). La insurrección espontánea de las masas en numerosas localidades, pronto encontró un canal de expresión en cientos de secciones sindicales de base que organizaban a la vanguardia obrera. Pese a la corrupta dirección de la UGTT, e incluso después de la caída de Ben Alí, la burguesía tuvo serias dificultades para retomar el control de la situación y formar un gobierno con cierta estabilidad. De hecho, tuvieron que emplearse a fondo para implicar a los dirigentes de la UGTT y a las organizaciones provenientes del estalinismo en fórmulas diversas de gobiernos de unidad nacional que pudieran frenar la furia de las masas, y acabar con los embriones de poder obrero que afloraban a partir de la actividad de las secciones sindicales y los comités populares.

Fue en Libia donde los comités revolucionarios se desarrollaron masivamente y provocaron la descomposición del Estado bonapartista burgués de Gadafi. La insurrección armada en Libia, comenzada en la ciudad de Bengasi, fue extendiéndose como la pólvora por todo el territorio hasta llegar a la capital Trípoli. A pesar de lo que muchos comentaristas

provenientes del estalinismo plantean en la actualidad, presentando al régimen de Gadafi como un ejemplo de socialismo, lo cierto es que llevaba mucho tiempo en alianzas con las potencias imperialistas, entregando las riquezas naturales del país a las multinacionales italianas, españolas y francesas. Gadafi y su camarilla habían cambiado mucho desde las reformas y nacionalizaciones de los primeros años de su gobierno (y que en una etapa histórica le empujó a apoyarse en la URSS). Su evolución era hacia la derecha, hasta convertirse en un títere megalómano y corrompido por sus nuevos amos occidentales, completamente desacreditado ante su pueblo.

El movimiento pronto se desarrolló a través de una guerra revolucionaria de milicias, que no eran más que la expresión de las asam-



bleas y comités populares. Sin embargo, que los dirigentes de esas milicias y comités aceptaran el apoyo militar envenenado del imperialismo, no sólo mostró el carácter pequeñoburgués de su programa y su completa desorientación, fue decisivo también para transformar el carácter de la lucha y el desenlace de la misma. La intervención no tenía nada que ver con ninguna causa democrática o humanitaria. Hay que recordar que mientras los marxistas nos opusimos rotundamente a las incursiones aéreas de Italia, Gran Bretaña y Francia, la socialdemocracia, muchos exestalinistas, y no pocos autodenominados “anticapitalistas” la aplaudían y jaleaban con la hipócrita excusa de aliviar la situación de las ciudades sitiadas por el ejército mercenario de Gadafi.

La acción imperialista tuvo efectos dramáticos: precipitó la caída de Gadafi, pero acabó con el carácter socialista que mostró la rebelión popular en sus inicios, animando al afloramiento de una legión de señores de la guerra que controlan pedazos del país. La contrarrevolución sumió Libia en el caos.

La revolución unifica a las masas, la contrarrevolución divide

Hay otro aspecto de la primavera árabe igualmente silenciado. Fue un movimiento que aunó con fuerza a los trabajadores y jóvenes, independientemente de su etnia o religión. En una zona del mundo donde las divisiones étnicas, religiosas y de género son tan marcadas —fruto del trabajo del imperialismo durante décadas y su política del “divide y vencerás”—, millones de personas se manifestaron juntas por un futuro digno; musulmanes y cristianos coptos, suníes y chiíes, árabes y bereberes, hombres y mujeres... Incluso en Iraq, las movilizaciones aunaron por primera vez las zonas de mayoría suní, chií y kurda. En Siria, el movimiento





en sus fases iniciales no tenía ningún carácter sectario, unía igualmente a suníes, alaúes, cristianos y ateos. Es más, la primavera árabe tuvo la fuerza de estimular el movimiento de los indignados en Israel, a cuyo campamento llamaron “plaza Tahrir”, y que popularizaron el lema “camina como un egipcio”.

Esa unión de los oprimidos por encima de las diferencias religiosas o étnicas (y mucho más en el caso de Israel) era un peligro mortal para el imperialismo, que usó todo su poder y dinero para fomentar nuevas divisiones y crear, especialmente en Siria (como ya hizo en Iraq y Afganistán), milicias yihadistas.

La clase dominante ahogó en sangre la revolución en Siria antes de que los brotes germinaran, y la destruyó en Libia, porque había aprendido de la experiencia de Túnez y Egipto. En estos países los acontecimientos les pillaron por sorpresa, su clase obrera es muy fuerte, venían de un triunfo histórico, y además el imperialismo tenía dificultades para explotar divisiones sectarias. Así, su táctica fue diferente. Intentaron ganar tiempo con todo tipo de maniobras, esperando que el movimiento se desinflara. Ofrecieron concesiones democráticas estrictamente formales y muy limitadas para persuadir a un sector de la población y desanimar al más movilizado. En particular, prometieron Asambleas Constituyentes, para que la izquierda picara el anzuelo y se abandonara la lucha por el socialismo, esto es, por conseguir las reivindicaciones más urgentes de las masas (mejoras salariales, viviendas dignas, precios asequibles de los productos básicos, sanidad y educación públicas, derechos democráticos...), de la única manera que sería posible hacerlas realidad: luchando por la nacionalización de la banca, de los monopolios imperialistas, por la incautación de las propiedades y empresas de las camarillas gobernantes y la entrega de la tierra a los campesinos.

Se pusieron en marcha todo tipo de elecciones (en gran parte amañadas) intentando dar una apariencia democrática a la dictadura del capital. Por supuesto, también se aparentó una farsa de “juicio político” contra las dictaduras, incluso se llevó a los tribunales a Mubarak. Pero estas maniobras no tuvieron el efecto suficiente como para acabar con el movimiento, incluso fueron desautorizadas por una abstención mayoritaria¹.

El papel de los islamistas

Para contener la rebelión, la burguesía árabe y los imperialistas —especialmente los estadounidenses— utilizaron los servicios de las organizaciones islamistas de los Hermanos Musulmanes en Egipto y En Nahda en Túnez. Ambos llegaron al gobierno ante la ausencia de alternativas revolucionarias claras², y con un resultado escaso (23% de los posibles votantes en Egipto; y 21% de los inscritos en Túnez). Tanto los Hermanos Musulmanes como En Nahda llevaron a cabo una política procapitalista, utilizaron los cuerpos armados del Estado para continuar la represión (los mismos cuerpos que, en el caso de Egipto, les desplazarían después) y emprendieron un programa social reaccionario. A los imperialistas les favorecía porque, no sólo aplicaban su agenda política³, sino que les permitía una demagogia antislamista muy útil para preparar un recambio, apoyándose de nuevo en sus fieles aliados del aparato del Estado (especialmente los altos mandos del Ejército) que había permanecido intacto.

Los gobiernos islamistas se enfrentaron a una rebelión de masas cada vez más amplia. En el verano de 2013 vimos en Egipto un proceso creciente de movilizaciones, la vuelta a la plaza Tahrir, y el aislamiento social de los Hermanos Musulmanes. También en Túnez la revolución se reavivó: en junio de 2012 y febrero de 2013, al calor del asesinato de los

líderes izquierdistas Mohamed Brahmí y Chukri Bel Aid, la UGTT convocó la primera huelga general en 80 años, se celebraron manifestaciones históricas y volvieron a resurgir los comités populares.

Sin embargo, estas nuevas crisis revolucionarias fueron aprovechadas por la reacción. El general Abdelfatá Al Sisi dio un golpe de Estado en Egipto, con el respaldo de la cúpula militar y los EEUU. El presidente Mursi fue detenido y miles de militantes de los Hermanos Musulmanes fueron asesinados. Algunos autodenominados marxistas, no se sabe muy bien por qué, hablaron de que Al Sisi había “usurpado” el movimiento de protesta debido al “prestigio” de los militares entre la población, pero que se estaba muy lejos de un golpe de Estado clásico. En realidad, Al Sisi y la camarilla militar encabezaron un típico golpe bonapartista. Por un lado lanzaban proclamas demagógicas contra la “islamización” de Egipto para golpear a los Hermanos Musulmanes, y ganar la complicidad de ciertos sectores de la “progresía” de izquierdas, las fuerzas *nasseristas*, o la Federación de Sindicatos Independientes; pero todo eso servía como preparación de su verdadero objetivo: reprimir salvajemente a la clase obrera, a la juventud de izquierda, a los sindicatos y las organizaciones populares combativas, imponiendo en la práctica una dictadura militar.

En Túnez, el partido que se presentó (y que fue presentado por la izquierda y la UGTT) como bandera de la lucha por la laicidad, Nidá Tunis, acogió en su seno a los elementos de la antigua dictadura; con tal bandera pudo ganar las elecciones de octubre de 2014, y aun así por sólo siete puntos de diferencia. Paradójicamente, su firmeza laicista se desmoronó fácilmente, llegando a los cuatro meses a un acuerdo con los islamistas de En Nahda.

Sí, la revolución ha sido derrotada en su primera etapa. La contrarrevolución domina el país más importante, Egipto, y

en donde no hay conflicto bélico los gobiernos siguen defendiendo los intereses de la burguesía local y las potencias imperialistas de turno. Pero la lucha continúa, y el topo de la historia sigue haciendo su trabajo.

La lucha continúa y la conciencia avanza

En Túnez hemos visto una explosión social en enero⁴, y en Egipto, pese a la tremenda represión, la lucha obrera no ha cesado, llegando este invierno a afectar a casi todos los sectores y a casi todas las zonas: huelgas entre los 3.000 trabajadores de la mayor compañía de aluminio, los 11.000 de Iron and Steel Company, los 12.000 de la petrolera Petrotrade, los 15.000 de la Shebin-al-Kom Textile Company (empresa renacionalizada; los huelguistas exigieron durante tres semanas la prometedida readmisión de los despedidos cuando era privada), 2.000 de empresas del Canal de Suez (exigen un aumento salarial del 400%), de los obreros que ocuparon la empresa de fertilizantes de Assiut, de los miles de las empresas del sector alimentario, de los de seguros, los del metro, los médicos (contra la represión policial). Esta oleada precede a la importante victoria de 14.000 huelguistas de la empresa Misr Spinning and Weaving, de Mahala el-Kubra (enorme conglomerado que es el principal referente obrero), así como la de una empresa textil de 7.000 obreros. Esas dos huelgas se extendieron peligrosamente y motivaron que el gobierno de Al Sisi cediera.

Las experiencias no pasan en balde, aun siendo muy dolorosas. Poderosas convicciones dominan las mentes de miles de activistas del movimiento. Los hechos hablan por sí mismos. Como señalamos en la declaración de la Corriente Marxista Revolucionaria de febrero de 2011, “la consecución de plenos derechos democráticos y de conquistas sociales, al menos de forma permanente, está descartada dentro de este sistema. El imperialismo no se puede permitir relajar el brazo de hierro con el que ahoga a los trabajadores y otros sectores, en época de crisis (...). La situación actual en los países árabes reivindica plenamente la teoría de la revolución permanente desarrollada por León Trotsky. La única posibilidad de realizar plenamente las aspiraciones democráticas de las masas, y mejorar radicalmente sus condiciones de vida, es tomando medidas decisivas contra el imperialismo y el capitalismo (...) La clase obrera árabe, encabezando a todos los oprimidos de la sociedad, debe tomar el poder en sus manos”⁵.

1. El 67% en el referéndum constitucional de Egipto, en diciembre de 2012; y 48% en las primeras elecciones a la Asamblea Constituyente tunecina, en octubre de 2011, y eso sin contar a los no inscritos. En Túnez no se atrevieron a ratificar la nueva Constitución, de 2014, con un referéndum.

2. Todo apunta a que en Egipto el candidato de la izquierda *nasserista*, Hamdín Sabahí, obtuvo la segunda posición, y no Ahmed Shafik, candidato *mubarakista*, que al pasar a la segunda vuelta facilitó el triunfo (y aun así por los pelos) del integrista Mursi.

3. Durante el gobierno del islamista Mursi, Egipto siguió recibiendo ayuda militar de EEUU por un valor anual de 1.300 millones de dólares, además de conseguir una condonación de deuda de mil millones, concedida en la reunión con Hillary Clinton del 12 de julio de 2012.

4. Ver *La explosión social en Túnez amenaza al gobierno*, en www.elmilitante.net.

5. Ver *Las masas impulsan la revolución en el mundo árabe*, en www.elmilitante.net.

Miriam Municio

Participación masiva en la tercera huelga general contra el gobierno de Tsipras

El 4 de febrero, coincidiendo con la visita de los representantes de la troika a Atenas para supervisar las medidas tomadas para hacer efectivo el tercer “rescate”, tuvo lugar la tercera huelga general contra el gobierno de Syriza. Entre las nuevas medidas se encuentran el enésimo recorte de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación, la bajada del subsidio del gasóleo a los agricultores, el aumento de los intereses del 3 al 5% para la población con deudas, o la privatización y entrega al capital extranjero de prácticamente todos los bienes del Estado, empezando por el principal puerto comercial del país, El Pireo, que ya está en manos del grupo chino Cosco Limited con el 51% de las acciones. El acuerdo con la troika obliga a Grecia a crear un fondo de privatizaciones cuyos ingresos solo podrán ser utilizados para hacer frente al pago de la deuda. Pero, por si fuera poco, el gobierno de Syriza ha aprobado los desahucios de primera vivienda para quien no pueda pagar la hipoteca.

Brutal reforma de las pensiones

La reivindicación central de esta huelga ha sido el rechazo a la durísima reforma de las pensiones. De llevarse a cabo significaría una subida de las cotizaciones de los trabajadores y un nuevo recorte de 1.800 millones de euros en esta partida (el equivalente al 1% del PIB), tras once recortes consecutivos desde 2010 que las han hecho caer un 40%. Todo ello en un país donde la fuente principal de ingresos del 51,8% de las familias son las pensiones.

La huelga, que ha incorporado a nuevos sectores, ha sido un completo éxito, y ha tenido un seguimiento masivo: parálisis total del transporte, apoyo del 95% en el sector privado, e incorporación masiva del pequeño comercio con una participación del 90%, que no se movilizaba desde hacía años. También han parado los taxistas, abogados, médicos, agricultores, profesores, portuarios... La Federación de Marineros amplió la huelga a 48 horas. Los agricultores, uno de los sectores más golpeados (con una subida del impuesto sobre la renta del 13% al 26%, y de sus cotizaciones del 7% al 27%), llevan semanas realizando cortes de carreteras y realizaron una marcha a Atenas el 13 de febrero. El descontento social y la capacidad de lucha de los trabajadores se han puesto también de relieve en las enormes manifestaciones celebradas en las principales ciudades, siendo la más masiva la de Atenas con cerca de 100.000 personas, según los sindicatos. Entre las consignas y gritos coreados en las calles y recogidos por los medios de comunicación se encontraban: “tenéis que retirar la reforma de pensiones o marcharos”, “os votamos para salvarnos, no para que acabéis con nosotros” o “pensiones de 300 euros a los 80 años, ¡eso es el capitalismo!”.

Y todo ello en un clima de efervescencia y movilizaciones sectoriales que no ha cesado desde que se convocara la primera huelga general el pasado 12 noviembre, con un fuerte im-



pacto especialmente en el sector público, y que ya reunió a 40.000 manifestantes en Atenas.

El movimiento obrero se recupera de la traición

Apenas un año después de la histórica victoria electoral de Syriza en Grecia y tras cortar en seco las expectativas de una transformación social profunda con su claudicación vergonzosa y vertiginosa ante los grandes poderes económicos (consumada tras el referéndum del 5 de julio), Tsipras se ha encontrado con la fuerza, la determinación y la movilización de los trabajadores, la juventud y los oprimidos griegos, que no están dispuestos a resignarse y aceptar sin más las mismas políticas de empobrecimiento masivo que aplicaron el PASOK y la derecha durante los últimos seis años.

Con la convocatoria de elecciones anticipadas el 20 de septiembre Tsipras tenía dos objetivos fundamentales: laminar la oposición interna en Syriza, suficientemente amplia como para crear dificultades a sus planes de recortes, y legitimar “democráticamente” su giro a la derecha. Syriza consiguió una victoria indiscutible (35,47%), más de siete puntos por encima de Nueva Democracia. Ahora bien, muy relevante fue la abstención sin precedentes (rozando el 44%),

la pérdida de 325.000 votos respecto a enero —el 14,5% de su electorado— y que a diferencia del triunfo obtenido nueve meses antes, festejado con entusiasmo dentro y fuera de Grecia, el 20S predominó una atmósfera de desencanto. Como dijimos en su momento interpretar esta victoria como un respaldo a su brutal giro a la derecha poco tenía que ver con la realidad. Un amplio sector de la clase trabajadora optó por el mal menor, en unas circunstancias críticas en las que no vio una alternativa mejor. Syriza ganó a pesar de esta traición histórica, no gracias a ella. Esa victoria no significaba el fin de la movilización, aunque esta podría tardar más o menos en recuperar el vigor anterior debido al impacto que supuso la traición de Tsipras.

Frente único para luchar contra los recortes

Ahora es fundamental dar continuidad al éxito de la huelga del 4 de febrero, planteando un plan de movilización ascendente hasta echar atrás los recortes y la defensa de un programa de ruptura con el capitalismo, que defienda el rechazo al pago de la deuda, la anulación de todos los compromisos con la troika, la nacionalización de la banca y de las grandes empresas bajo control democrático de los trabajadores y un llamamiento internacionalista a la clase obrera europea para formar una Federación Socialista de Pueblos de Europa. Todas las fuerzas de la izquierda, empezando por el KKE y Unidad Popular (la escisión de Syriza), tienen que formar un frente único para poner en práctica estas dos tareas fundamentales, impulsando asambleas y comités en todos los barrios, en las fábricas y en los centros de estudio. También hay que apelar a la base de Syriza, que ha participado masivamente en la huelga general del 4 de febrero. Eso implica que hay que cortar de raíz con el sectarismo —que ha impedido que el KKE avance más—. También es fundamental evitar la

indefinición o la ambigüedad a la hora de defender una alternativa a los planes de la troika. Muchas de las medidas propuestas por los dirigentes de Unidad Popular en las elecciones del 20 de septiembre eran positivas (no al Memorandum, no al pago de la deuda ilegítima...) pero estaban desligadas de una estrategia clara de ruptura con el capitalismo, de una alternativa socialista para Grecia y para Europa, y de un plan de organización y movilización que lo acompañara. Además, los principales dirigentes formaron parte del gobierno hasta agosto, cuando el giro a la derecha era evidente, sin diferenciarse con la nitidez y contundencia necesaria y sin apelar en ningún caso a la movilización de los trabajadores con un plan concreto de lucha. Estas carencias le restaron coherencia y credibilidad.

La frustración de la perspectiva de un cambio social profundo (el 85% de la población está insatisfecha y el 71% de los votantes de Syriza, decepcionados) favorece las condiciones políticas para que en el medio plazo la derecha y la ultraderecha aumenten su apoyo (encuestas de enero dan por primera vez ventaja a ND sobre Syriza). El hecho de que los neonazis de Amanecer Dorado se hayan afianzado como tercera fuerza política (7%) es una seria advertencia. Si continúa el hundimiento de la economía, el crecimiento del desempleo y la miseria; si las clases medias empobrecidas que han apoyado a Syriza viven la frustración de sus expectativas, y la crisis de los refugiados continúa sin solución en una sociedad duramente golpeada; en definitiva, si no se produce una salida revolucionaria a esta situación de descomposición la reacción puede ampliar su base social. Pero hoy por hoy la correlación de fuerzas sigue siendo claramente favorable a la clase obrera y a la transformación socialista de la sociedad. Es importante aprovechar al máximo este nuevo impulso de la movilización para construir una alternativa marxista y revolucionaria. ¡El tiempo apremia!



¿Proceso de paz en Siria?

Santiago Freire

Después de la destrucción de ciudades e infraestructuras, de que los muertos se cuenten por cientos de miles y provocar el éxodo de millones de refugiados, EEUU se ha visto obligado a promover un alto el fuego temporal en la guerra de Siria. ¿La razón? el avance de las tropas gubernamentales gracias a los bombardeos de los aviones rusos. La cuestión en cualquier caso es concreta. ¿Se puede consolidar la paz en Siria? ¿Es posible poner fin a la guerra y la destrucción de Oriente Medio?

El alto el fuego, que entró en vigor el 27 de febrero y se prolongará por dos semanas, afectará por un lado a las operaciones del ejército sirio y sus aliados rusos, iraníes y libaneses (Hezbollah), y por otro a las milicias yihadistas no calificadas de “terroristas” (una ínfima minoría, al quedar excluido el Estado Islámico —Daesh— y otras organizaciones afines). Así mismo, el presidente al Assad ha convocado “elecciones legislativas” para el 13 de abril, lo que no deja de sonar a una broma macabra en un país arrasado por la guerra.

Si tenemos en cuenta los antecedentes, y los intereses reales en juego, es obvio que este “cese de hostilidades” parece destinado al fracaso. Todo aparenta a una huida hacia delante del imperialismo estadounidense, para ganar tiempo y recuperar la iniciativa, en un momento extremadamente difícil para sus intereses. Su debilidad en la región, plasmada en la falta de apoyos sobre el terreno, la pérdida del control sobre los grupos yihadistas que son sostenidos a su vez por sus viejos aliados —Turquía y Arabia Saudí— cuyas agendas difieren cada vez más de los intereses norteamericanos, y la aparición de Rusia como potencia beligerante, ha forzado a la administración Obama a tener que variar su estrategia.

Su planteamiento ahora es negociar una “transición” para Siria, sin considerar como condición necesaria la salida de al Assad del poder, mientras con el alto el fuego y la excusa de ayuda huma-



nitaria impiden que el régimen sirio y sus aliados puedan seguir recuperando territorio, fortaleciendo más su posición de cara a una hipotética negociación. Al tiempo tratan de forjar una alianza con Irán, concretada en la firma del pacto nuclear y el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el Estado persa, para asegurarse así que este colabore con sus objetivos y se comprometa en la estabilización de Oriente Medio.

Rusia e Irán consolidan sus posiciones, y China mira atenta sus intereses

Aprovechando los problemas estadounidenses, Rusia ha pasado a convertirse en un factor clave en el escenario sirio, pero sus intereses van mucho más allá de mantener su posición geoestratégica y proteger su base naval en la ciudad de Tartus. Putin quiere recuperar para Rusia un papel de primer orden en las relaciones internacionales que le permita también una salida favorable en su conflicto con Ucrania y aliviar su complicada situación económica. También Irán aparece, por ahora, como uno de los grandes beneficiarios de la situación que se vive en la zona en general, y en Siria en particular. El pacto con Estados Unidos le permite reforzar su papel de potencia regional y acabar con las sanciones internacionales que estaban golpeando muy duramente su economía.

Tanto Rusia como Irán están dispuestos a negociar, siempre que el resultado final no ponga en peligro sus intereses y les siga garantizando un papel clave en la región. Por supuesto, en este negocio de bucaneros, Moscú y Teherán no tendrían mayor problema con la continuidad o no de al Assad y su régimen, un peón al que sacrificarían en caso de necesidad. Lo que pueda ocurrir en el futuro no es fácil de predecir: el gran juego en Siria y Oriente Medio está lleno de contradicciones y nuevos realineamientos no están descartados. La colaboración entre rusos e iraníes es fundamentalmente coyuntural y responde a sus necesidades actuales, en tanto que Irán pretende seguir estrechando lazos con Estados Unidos, y Rusia busca ampliar sus relaciones con algunos de los grandes rivales de los ayatolás, como es el caso de Arabia Saudí, país con el que recientemente ha firmado un acuerdo para contener la producción de petróleo. También existen rivalidades entre ambas potencias en Iraq y en las repúblicas asiáticas de la extinta URSS, donde se libra otra batalla por el control de sus materias primas y áreas de tránsito comercial.

En cuanto a China, el régimen de Beijing tiene claros intereses imperialistas en Oriente Medio: pretende construir una gran ruta comercial que una el Sudeste de Asia con Europa, pasando por la zona en conflicto, y necesita también de sus recursos energéticos. Ninguno de los pasos que ha dado Putin en los últimos meses podría entenderse sin el apoyo de los imperialistas chinos, interesados en afianzar alianzas en la región para promover sus objetivos en detrimento del imperialismo occidental y concretamente de EEUU. La reciente visita que el presidente Xi Jinping ha realizado a Arabia Saudí, Irán y Egipto, ha sido un recordatorio de que China también es un actor clave para cualquier posible acuerdo en Siria, obviamente acorde con sus planes estratégicos.

La agenda de Turquía y Arabia Saudí

Las oligarquías turca y saudí han sido las grandes promotoras de las fuerzas yihadistas en Siria, incluyendo a Daesh, a través de las cuales esperaban derribar el régimen de al Assad. De esta manera los

saudíes golpeaban a Irán, destruyendo a uno de sus principales aliados, en tanto Turquía conseguiría que Siria cayera bajo su influencia, lo que le facilitaría además aplastar a los kurdos que habitan y combaten en el área de Rojava, al norte del país. La entrada en escena de Rusia, junto a Irán y Hezbollah, ha dinamitado esta posibilidad permitiendo al ejército sirio recuperar cada vez más territorio y poner en graves apuros a los aliados de ambos países, las milicias yihadistas.

El cambio de la correlación de fuerzas en el campo de batalla, y también en el diplomático, ha empujado a estas milicias al boicot de unas negociaciones que les serían adversas alentando, incluso, la invasión terrestre por parte de fuerzas militares turcas y saudíes. No hay que olvidar que este nuevo armisticio llega después de que las tropas turcas utilizaran el comienzo de las “negociaciones de paz” en Munich (12 de febrero) para golpear a las milicias kurdas en Siria, y en medio de las insinuaciones vertidas desde Ankara a favor de la partición del país (algo en lo que son expertos los EEUU como demuestran los ejemplos de Iraq, Afganistán o Libia). Aunque tanto el régimen de Riad como el de Ankara niegan ningún preparativo de invasión, es evidente que en sus cálculos no está descartada esta posibilidad, que vestirían con la falsa excusa de combatir a Daesh, pero que serviría para frenar el avance del ejército sirio y sus aliados, y ampliar la ofensiva de Erdogan contra los kurdos de Rojava, a pesar de ser los únicos que han luchado de forma real y efectiva contra el Daesh. Una acción de este tipo podría significar el estallido de un conflicto armado todavía a una escala mayor y de consecuencias totalmente impredecibles.

Las potencias imperialistas llevan años confrontando en el tablero sirio, arrastrando al conjunto de Oriente Medio a una situación caótica e irresoluble, de la que el gran beneficiario es un Estado Islámico contra el que ninguna potencia combate realmente. La población que ha sufrido brutalmente esta guerra aniquiladora no puede esperar nada bueno de una “paz” patrocinada por los mismos ladrones que han hundido su país en la barbarie. La paz que ansía el pueblo solo será posible con el derrocamiento del capitalismo y fin del dominio imperialista.



El PSOE se entrega a la derecha

El cambio se consigue luchando

La crisis política abierta tras las elecciones del pasado 20D continúa profundizándose. Después de que Rajoy declinara someterse al debate de investidura, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tomó el testigo para iniciar las negociaciones de cara a formar gobierno. No eran pocos los que pensaban que mantendría su palabra y resistiría las presiones de los poderes fácticos, de Bruselas y de muchos barones de su partido para no entregarse a la derecha. Ilusiones vanas. En pocos días, Pedro Sánchez anunció un acuerdo vergonzoso con Ciudadanos aclarando su disposición a gobernar aplicando las mismas políticas de austeridad y recortes sociales del PP.

Desde entonces los acontecimientos se han desarrollado a gran velocidad hasta concluir en el segundo debate de investidura, celebrado el viernes 4 de marzo, sin que Pedro Sánchez obtuviese la minoría simple necesaria para poder ser presidente. Tras el contundente NO de Podemos en la primera votación, con un discurso de Pablo Iglesias muy combativo y de izquierdas —algo inusual en la tribuna parlamentaria—, denunciando no sólo al PP y Ciudadanos, a los que acusó abiertamente de representar a la derecha franquista y los intereses del Ibex 35, sino también la completa entrega de los dirigentes del PSOE a los grandes poderes económicos y su traición a los votantes socialistas, la burguesía y la socialdemocracia han desencadenado una demagógica y virulenta campaña contra Podemos.

Acusando cínicamente a la formación de Pablo Iglesias de urdir una “pinza” con el PP para evitar un “gobierno de progreso”, Sánchez utilizó el argumento tramposo de que el voto NO a su investidura equivalía a votar a favor de la continuidad de Rajoy. Pero, realmente, quien ha pactado con la derecha, suscribiendo un acuerdo programático con Ciudadanos que traiciona las aspiraciones de cambio de millones de trabajadores y jóvenes, ha sido el PSOE. Los continuos, públicos y explícitos ofrecimientos de Albert Rivera a que el PP se incorpore al pacto echan por tierra, por sí mismos, la pose del PSOE. La “furia anti Rajoy” escenificada por Pedro Sánchez es pura fachada para tratar de ocultar el verdadero camino que está emprendiendo su partido: mantener al PP en el poder por la vía de una gran coalición. ¡Y encima quería que Podemos participara de esta traición!

Por si no estuviera suficientemente clara la auténtica estrategia del PSOE, al día siguiente de la segunda sesión de investidura no sólo ratificaron su pacto con Ciudadanos sino que Sánchez anunció que “PSOE y Ciudadanos negociarán conjuntamente con el resto de fuerzas”; es decir, la socialdemocracia vuelve

a dinamitar la posibilidad de un gobierno de izquierdas. Seamos serios, ¿quién hace la pinza con la derecha?

Un paso más hacia la gran coalición

Como ha señalado muy correctamente Íñigo Errejón, lo que hace Rivera es “arrastrar al PSOE a su terreno, desde donde tiende la mano al PP” y la decisión de PSOE y C’s de continuar juntos en las negociaciones es “el primer paso para la gran restauración”. Efectivamente, una gran estafa. No es Podemos sino el PSOE el que sigue suministrando oxígeno y apuntalando a un PP moribundo, es la socialdemocracia la que está preparando el terreno para colar al PP en el gobierno por la puerta de atrás.

No, la verdadera disyuntiva no estaba, ni está, entre un “gobierno de cambio” formado por el PSOE y las juventudes del PP —como el propio Sánchez calificaba a Ciudadanos en campaña electoral— o la continuidad del PP. La auténtica decisión está entre apostar por un gobierno de izquierdas, que rompa por completo con la política de recortes y contrarreformas, o sostener, de una u otra forma, un gobierno al servicio de la banca y de las grandes empresas. Y lo que se ha puesto en evidencia es que estando en manos del PSOE la primera opción se ha entregado en cuerpo y alma a la segunda.

Otra maniobra de los dirigentes del PSOE para justificar su negativa a un gobierno de izquierdas es la referencia hecha por Pablo Iglesias a Felipe González de tener “las manos manchadas en cal viva”, en clara alusión a la implicación del expresidente en la guerra sucia de los GAL y para advertir a Sánchez que no se deje guiar por quienes han llevado al PSOE por una senda muy peligrosa. El falso victimismo del portavoz socialista, Antonio Hernando, diciendo que “cuando en el Congreso se agrade, se generan heridas difíciles de cerrar”, no es más que una lamentable excusa de quienes ya habían decidido previamente con quién querían gobernar.

Sánchez también ha alegado en su investidura la falta de mayoría parlamentaria para un gobierno de izquierdas. Pero este argumento “aritmético” se podría emplear con mucha más razón contra el acuerdo entre PSOE y C’s. Es una treta más para disfrazar su nula voluntad política de apostar por un gobierno de izquierdas, que sí tenía posibilidades de salir. Incluso si finalmente fuese bloqueado por falta de apoyo parlamentario, era la mejor opción para favorecer a las opciones de la izquierda de cara a unas elecciones anticipadas. Pero como también ha quedado muy claro en los úl-



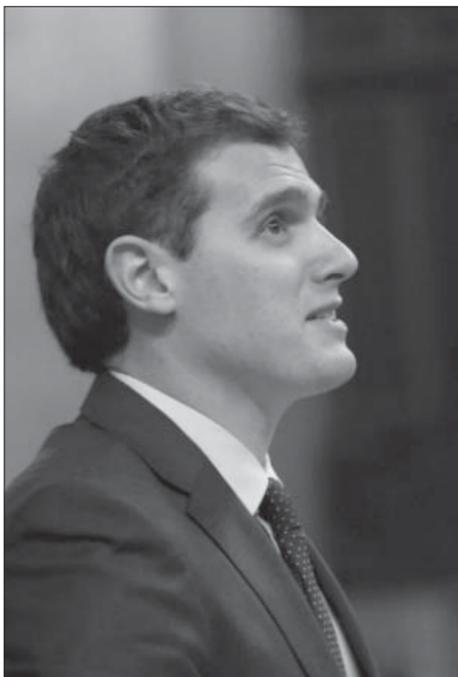
timos días, la dirección del PSOE —no contento con cosechar los peores resultados electorales de su historia— parece dispuesta a emprender el camino que ya recorrió el PASOK en Grecia y anteponer su compromiso con el sistema capitalista a cualquier otra consideración.

El contenido del acuerdo

El pacto firmado entre PSOE y Cs no tiene un ápice de progresista. Cuestiones centrales como las reformas laborales, la LOMCE, la ley Mordaza y los innumerables recortes sociales impuestos por el PP, no se derogan ni eliminan. El acuerdo hace vagas observaciones sobre una posible modificación de la reforma laboral, pero manteniendo en lo esencial sus medidas más lesivas para los trabajadores, incluso empeorando las modalidades de contratación y reduciendo las indemnizaciones por despido. Sobre la

sanidad pública, no hay ninguna mención a blindarla de futuras privatizaciones, ni anular las que ya están en marcha, volver a contratar a los miles de médicos despedidos o recuperar los miles de millones de euros que han sido eliminados de los presupuestos sanitarios en los últimos años. La cosa es aún más escandalosa en lo que se refiere a la enseñanza pública: no hay la más mínima referencia a la derogación de la LOMCE o el 3+2, a la contratación de los miles de profesores despedidos o medida alguna sobre el incremento de los presupuestos educativos después de la sangría brutal que han sufrido. Por supuesto, ninguna palabra sobre la mejora sustancial de las becas o la reducción drástica de las tasas académicas universitarias.

En cuanto a la fiscalidad, se hacen vagas promesas de ensanchar la base del impuesto de sociedades, pero se suavizan las medidas de control de las socie-



dades de inversión colectiva de capital variable (SICAV) que proponía anteriormente el PSOE, y se renuncia a “desincentivar los blindajes empresariales de los altos ejecutivos”, promesa que queda incumplida. Y el SMI subiría un mísero 1%, igual que ha hecho el PP en este último año. En fin, más de las mismas recetas que hemos sufrido en estos últimos cuatro años.

El PP frente al pacto

El rechazo del PP a la investidura de Sánchez, tampoco le da un plus de progresismo a este último. Las razones del NO de Rajoy no tienen que ver con el contenido del pacto PSOE-C's sino con los intereses del aparato político del PP, que cuentan mucho en esta coyuntura, precisamente cuando más acosados se sienten por los casos de corrupción y el descrédito de sus siglas. No se puede descartar que fuercen la situación hasta llegar a elecciones anticipadas, con el margen suficiente incluso para realizar una operación de maquillaje, una especie de refundación del PP, con un candidato menos achicharrado que Rajoy.

Sin embargo, las presiones de los capitalistas españoles y europeos para que se imponga finalmente una gran coalición (PP-C's-PSOE) son enormes y aumentarán, tal como señaló Pablo Iglesias en el debate de investidura. La resistencia a la convocatoria de unas nuevas elecciones es cada día más grande, y después de lo de ocurrido en el parlamento se redoblará. Por supuesto, no se puede descartar que en junio se vuelvan a abrir las urnas, pero un amplio sector de la burguesía barrunta que nada bueno saldrá de ello, y que el gran beneficiario de unas elecciones anticipadas puede ser Podemos y las confluencias de la izquierda. Por eso, las negociaciones que se abren a partir de ahora seguirán pivotando en torno al pacto PSOE-Ciudadanos con el objetivo de obligar al PP a que nueva ficha e inicie una renovación interna (sin descartar que Rajoy y los elementos más quemados del partido den un paso atrás), y justificar abiertamente el pacto a tres en aras de la gobernabilidad y la responsabilidad. En este camino, sería posible incluso que recurrieran a alguna figura “independiente” como nuevo candidato a investirse presidente, o al propio Rivera.

La situación es tan volátil que aunque la clase dominante lograra formar un gobierno acorde a sus necesidades y evitar elecciones, estarían muy lejos de estabilizar la situación; más temprano que tarde

se enfrentarán de nuevo a una gran contestación social a sus políticas.

Podemos, y toda la izquierda que lucha, debemos responder con la movilización en las calles

La reacción de la dirección de Podemos ante la traición de Pedro Sánchez ha sido positiva. En primer lugar, se levantó de la mesa de negociación a cuatro (PSOE, IU, Compromís y Podemos), una negociación que, en los hechos, se había convertido en un completo fraude y sólo tenía la función de proteger el flanco izquierdo del PSOE cuando tenían casi ultimado el pacto con la derecha.

Pablo Iglesias también ha demostrado que es capaz en el terreno parlamentario de desnudar las mentiras y las maniobras de la derecha y de Pedro Sánchez. En sus intervenciones denunció a los poderes fácticos: “Ellos han pedido una gran coalición PSOE-Ciudadanos-PP. Las oligarquías temen un cambio real en España”. Contestando al falaz argumento de la “pinza”, señaló muy acertadamente: “...lo que le importaría a Rajoy es que usted se ponga con nosotros, es lo que le preocupa a las oligarquías de este país. Atrévase, señor Sánchez, con un programa progresista de verdad”. Pero la parte más relevante de su discurso la diri-

gió directamente a la militancia socialista, para denunciar el comportamiento de su dirección: “[el PSOE era un partido] por el que te llevaban a los pelotones de fusilamiento y ahora a los consejos de administración”. En alusión directa a Pedro Sánchez le señaló: “Yo no traiciono a mi gente. Desde el principio le dijimos o gran coalición o gobierno progresista. Cúdense de la naranja mecánica, es un socio muy hábil. Le obligarán a tragar el plan de las oligarquías, con el PP y no estará usted al frente. Negocie con nosotros, no vete abstenciones y deje de escuchar los cantos de sirena que le llevan al naufragio”. Para el final, dejó una cita sin desperdicio: “Merecer el odio de los que envenenan al pueblo será para nosotros una honra” (Pablo Iglesias, fundador del PSOE).

Pero no basta sólo con la denuncia parlamentaria, ahora es necesario pasar a la acción. Podemos tiene una gran responsabilidad, tiene que trasladar a la calle la oposición a este pacto PSOE-C's con un llamamiento a la movilización masiva en todas las ciudades del Estado español.

La movilización es una herramienta fundamental en este momento político. Todo lo que puede dar de sí el parlamento, con su composición actual, ya lo ha hecho. Tanto el PP como C's y el aparato del PSOE están en una misma línea política. Cumplir las órdenes de Bruselas

y los grandes poderes económicos, para continuar con la agenda de recortes del gasto social, privatizaciones, y ataques a nuestros derechos y conquistas sociales. Por eso, ninguna aritmética parlamentaria puede modificar un plan estratégico que sólo será roto con la movilización masiva de la población, ocupando las plazas y las calles, profundizando la rebelión social que ha colocado a la derecha contra las cuerdas en estos años, y que en las elecciones del 20D tuvo su correspondencia con el mayor varapalo que jamás ha sufrido el bipartidismo en cuarenta años.

Podemos no puede limitarse a una oposición parlamentaria. Debe basarse en aquello que lo hizo fuerte: la lucha de masas, desde el 15M a Gamonal, desde las huelgas generales a las Mareas Ciudadanas o las Marchas de la Dignidad. Sí, hay que movilizar ya, inmediatamente y de manera contundente por las reivindicaciones que el movimiento ha colocado desde hace tiempo encima de la mesa y siguen pendientes: Derogación de la reforma laboral, de la Ley Mordaza, de las contrarreformas franquistas contra la enseñanza pública (LOMCE y 3+2); por el derecho a una vivienda digna (prohibición por ley de los desahucios y parque público de viviendas con alquileres sociales), y a unas condiciones de vida que permitan a la población salir de la crisis, aumentando sustancialmente los subsidios de desempleo, poniendo fin a los recortes sociales en dependencia, en sanidad, acabando con la pobreza energética (nacionalizando las eléctricas)...

El camino a seguir es claro y está trazado. Lo sabemos por experiencia. La convocatoria del Sindicato de Estudiantes de una nueva huelga general estudiantil para el 13 y 14 de abril es una iniciativa extraordinaria, que debe ser tomada como ejemplo. Los estudiantes ya han dado el primer paso. Ahora hay que completarlo. Podemos, Izquierda Unida, las Mareas Ciudadanas, las Marchas de la Dignidad, los activistas combativos de los sindicatos de clase, tenemos la obligación de llenar las calles con la indignación y la lucha organizada que hará posible el cambio político, para que nadie nos arrebathe lo que es nuestro y por lo que tanto hemos peleado. El cambio se consigue luchando.



Basta de excusas

El gobierno de Ahora Madrid tiene que cumplir su programa

Antonio García Sinde

La noche del 24 de mayo de 2015 conoció una verdadera explosión de alegría en las principales ciudades del Estado español. En Madrid, Zaragoza, Barcelona y muchas localidades más, las “candidaturas del cambio” arrasaban en las elecciones municipales y ponían fin a años de ayuntamientos de la derecha caracterizados por los recortes sociales y la corrupción.

En 2011 una enorme ola de movilización social sacudió todo el país, teniendo como epicentro la ciudad de Madrid. El estallido espontáneo de indignación del 15-M continuó con las diversas Mareas, la lucha de la PAH contra los desahucios, las Marchas de la Dignidad, y luchas obreras ejemplares como las de los barrenderos y jardineros, Coca-Cola o las subcontratas de Telefónica. El rotundo triunfo electoral de Ahora Madrid fue la consecuencia directa de esa ola de movilización. Se abría una oportunidad histórica para iniciar un proceso de cambios profundos en un ayuntamiento decisivo. Por ello no es de extrañar que desde las filas de la derecha y los medios de comunicación afines, sin dar siquiera un día de respiro, se iniciase una campaña de acoso al nuevo gobierno municipal.

Por la remunicipalización de los servicios públicos

Desgraciadamente, los nueve meses de gobierno municipal de Manuela Carmena ponen al desnudo la falta de un programa de transformación social consecuente. Tres son los aspectos más relevantes donde Ahora Madrid no solo no está cumpliendo con sus propuestas electorales sino que está actuando en una dirección opuesta, en contra de lo decidido en los cientos de debates realizados por la candidatura con vecinos de todos los barrios madrileños.

Quizás el aspecto más sangrante es la violación del compromiso de poner fin a los desahucios. Esta reivindicación ha sido abandonada y sustituida por medidas paliativas completamente inútiles, como la creación de un sistema de mediación con los bancos que ignora que la lógica del beneficio se impone, como se ha impuesto siempre, sobre los piadosos deseos de convertir al poder financiero en una organización benéfica. Y esta cesión, como no podía ser de otro modo, va unida a la vergonzosa desaparición de los cargos de Ahora Madrid de las acciones de resistencia contra los desahucios prácticamente desde el día siguiente a su toma de posesión.

Una segunda propuesta central del programa de Ahora Madrid, la remunicipalización de los servicios públicos privatizados por el PP, ha quedado en papel mojado. Tanto en la privatización del Polideportivo Barceló como en la prórroga de la privatización del servicio telefónico de Atención a la Ciudadanía, el Ayuntamiento ha demostrado que no está dispuesto a realizar la municipaliza-



ción de servicios —algo imprescindible para ofrecer prestaciones de calidad a los ciudadanos y para asegurar condiciones laborales dignas a sus trabajadores—. Respecto a la promesa de remunicipalizar los servicios de jardinería y limpieza viaria de la capital no solamente lo ha incumplido —manteniendo los contratos a las empresas concesionarias, las mismas que tras conseguir los contratos en 2013 redujeron el número de barrenderos en más de 2.400—, sino que sus argumentos para no hacerlo son similares a los que podría dar la derecha. Carmena considera “totalmente inviable la remunicipalización por motivos jurídicos y económicos” y señala que de llevarse a cabo “el consistorio no podría garantizar los puestos de trabajo”. Además, rechaza “crear una empresa pública que pudiera absorber a estos trabajadores, ya que el endeudamiento actual del Ayuntamiento se lo impide”. Eso sí, mientras Madrid tiene hoy un 40% menos de barrenderos que en 2013, la alcaldesa se muestra muy satisfecha y orgullosa de su iniciativa de reparto de 38.000 ceniceros de bolsillo. Un verdadero insulto a la inteligencia de los vecinos de Madrid, que hay que sumar a las “innovadoras” propuestas de

que sean los niños los que recojan las colillas y papeles, las mamás las que limpien los coles y los universitarios barran las calles.

Y por último, y en la misma línea de concesiones al poder económico, a pesar de su clara promesa de poner fin a las operaciones urbanísticas especulativas el gobierno municipal titubea ante cualquier presión del sector privado. El voto de una mayoría de concejales de Ahora Madrid uniéndose al PP para aprobar una operación especulativa de promoción de viviendas de lujo en un solar del Ministerio de Defensa cerca de la Castellana, no anticipa nada bueno cuando se trata de frenar macrooperaciones especulativas como la Operación Chamartín, donde el BBVA y la Constructora San José tienen intereses valorados en 2011 en más de 11.000 millones de euros.

La debilidad invita a la agresión

Pero no solo eso. También está fallando en su compromiso con la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las víctimas del franquismo, retrocediendo ante la presión, por otro lado más

que previsible, de la derecha. El bochornoso ejemplo de la recolocación del monolito al Alférez Provisional, un homenaje a un cuerpo militar formado por quienes se alistaron voluntariamente al ejército golpista de Franco y que lleva la nada interpretable inscripción de “Por Dios y por España”, no hace más que despreciar a las víctimas del franquismo y da pábulo a la demagogia del PP, aplaudida por los grupos fascistas, de que eso es “reabrir las heridas del pasado”. Mientras el ayuntamiento de Madrid mandaba una carta a la Fundación Nacional Francisco Franco explicando que “han dado órdenes para reponer el monumento”, es decir, mientras en la práctica se disculpan ante los fascistas, dicha fundación, junto a excombatientes de la División Azul, la Hermandad de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos del Jarama o Manos Limpias convocaban una concentración en el monolito para celebrar su recolocación: “Nos felicitamos por la noticia y seguiremos luchando para invalidar la mal llamada Ley de Memoria Histórica”.

Una actitud que se ha repetido a raíz del juicio contra la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, a la que se pide un año de cárcel por participar en una protesta contra la existencia de una capilla en la universidad pública hace cinco años. La portavoz del ayuntamiento ha pedido disculpas en privado, ante el arzobispo, y luego públicamente. En vez de utilizar este escandaloso juicio, que atenta contra la libertad de expresión y manifestación, como una denuncia contra el poder y los privilegios de la jerarquía de la iglesia católica, se escenifica la sumisión a esta institución.

Ante el caso de los titiriteros encarcelados y que han sido víctimas de un brutal atropello policial y judicial, la reacción de Manuela Carmena y de una parte del equipo de Ahora Madrid no ha estado a la altura. Su actitud presentando una denuncia contra los jóvenes, y después aceptando los argumentos de la derecha sin denunciar el burdo montaje del PP y sus medios afines, es la mejor forma de dar alas a estos reaccionarios y debilitar la causa de la libertad de expresión.

Si el ayuntamiento continúa por la vía de las concesiones y acuerdos con el poder económico y los sectores más reaccionarios del aparato del Estado, lo que tendremos será la repetición de una experiencia ya conocida: la que llevó a los dirigentes socialdemócratas del PSOE a asumir el sistema capitalista con todas sus consecuencias y a desperdiciar una oportunidad histórica de impulsar un cambio social real. Este es el camino para que la derecha recupere la iniciativa.

Por eso es urgente e imprescindible que el ayuntamiento de Ahora Madrid rectifique radicalmente su orientación, cumpla con su programa electoral y asuma que sólo la gestión pública de los recursos y proyectos municipales, sometida al control de trabajadores y vecinos, puede asegurar una transformación real de nuestra ciudad en interés de la mayoría. Este programa tiene que estar respaldado por la movilización social. Si emprende este camino contará con el apoyo activo de la población, y podría hacer frente a la ofensiva de la reacción y convertirse en impulso para la lucha de los trabajadores y jóvenes de todo el Estado. No hay tercera vías.



Crisis en la derecha

La corrupción acorrala al PP

Víctor Taibo

Gürtel, Púnica, Taula, Nóos, Brugal, Bárcenas..., la lista no se acaba. Los casos de corrupción del PP se extienden alcanzando cada rincón del partido, desde la dirección nacional hasta concejales, diputados autonómicos, alcaldes y alcaldesas, presidentas regionales, tesoreros, gerentes. Pero esta implosión purulenta es algo más. Refleja la crisis política de la derecha, su deslegitimación social, y el agotamiento de un régimen que se ha estrellado contra la movilización de millones. La reacción de una población harta de mangoneo, impunidad, y dispuesta a no dejarse engañar, ha hecho saltar el entramado.

Cada día es más evidente que los herederos políticos de la más rancia tradición franquista se han comportado durante años como una auténtica trama organizada para el saqueo de las arcas públicas. El *modus operandi* de la "mafia" peperera es siempre la misma, y compartida con otras formaciones semejantes (véase CiU en Catalunya): contratos y concesiones públicas amañadas, comisiones ilegales, y blanqueo del dinero negro acumulado. Un negocio boyante basado en la complicidad de las grandes empresas y multinacionales que licitan la obra pública, y en la impunidad que permite el control de numerosos resortes del poder político y judicial.

Capitalismo y corrupción

Un aspecto silenciado generalmente por los medios de comunicación es el papel de los corruptores, es decir, de las empresas implicadas y beneficiarias de dichas tramas, principalmente grandes multinacionales y empresas del Ibx 35 (OHL, Telefónica, FCC, Cofely y decenas más), que han financiado generosamente al PP a cambio de contratos y concesiones en infraestructuras y servicios públicos privatizados.

La corrupción no es una cuestión de manzanas podridas y de casos individuales, sino un elemento consustancial al normal funcionamiento del capitalismo.



La crisis económica y la movilización social han permitido aflorar los casos más sangrantes, no solo aquí sino en muchos otros países. Pero la corrupción "ilegal" es mucho más pequeña que la corrupción "legal", es decir, la que proviene del funcionamiento habitual del sistema que a través de reformas laborales, leyes que recortan el gasto social, o privatizaciones aprobadas en los parlamentos, permiten trasvasar billones de euros de los bolsillos de los trabajadores a las cuentas de resultados de las grandes empresas y bancos. Combatir la corrupción, en todas sus formas, requiere romper con el capitalismo.

Madrid y Valencia, los motores del saqueo

Los delitos de todo tipo en los que se han visto implicados responsables del PP son variopintos: blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, falsificación documental, encubrimiento y destrucción de pruebas, entre otros. El caso Bárcenas ha sido el más sonado de todos ellos, pero los últimos escándalos tienen incluso más significación política. La dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP regional, y la defensa numantina de Rita Barberá de su aforamiento en el Senado, hay que interpretarlos como signos evidentes de que los cuchillos se están afilando para una guerra que pronto estallará abiertamente. Aguirre, porque se reserva su decisión de dar la batalla a Rajoy en el futuro in-

mediato, y Rita, porque ha mandado un mensaje nítido, al estilo de las memorables películas de Coppola y Scorsese: si ella va a la cárcel tirará de la manta y no dejará títere con cabeza. En fin, todo buenísimas noticias.

Obviamente los casos del PP de Madrid y de Valencia no son moco de pavo. Ambos eran los motores de las tramas y de donde salía lo fundamental de la presunta financiación ilegal del PP. En ambas comunidades sus responsables manejaban los recursos públicos y dichas administraciones como si se trataran de su cortijo particular, desviando los presupuestos para sus empresarios amigos, que a su vez garantizaban las correspondientes mordidas a los intermediarios del PP. Los recortes y privatizaciones han sido el auténtico negocio.

En la Comunidad de Madrid los casos no paran de multiplicarse. El último, el del Canal de Isabel II, donde la corrupción ya apunta al anterior presidente de la Comunidad, Ignacio González, mano derecha de Aguirre tras el relevo de Granados (encarcelado desde hace casi dos años). La trama Púnica, el saqueo de Bankia, la Ciudad de la Justicia, todo un entramado de negocios al más puro estilo de la mafia calabresa. Y el aparato de propaganda, Telemadrid, hundida para beneficio de los periodistas del poder, como Hermann Tertsch o Sánchez Dragó, liberales como Aguirre y críticos del sector público, pero que no dudaron en lucrarse de la cadena pública mientras se acordaba un ERE para sus 800 trabajadores.

¿Y el PP del País Valencià? ¿Cómo se puede calificar lo que ha hecho esta organización durante años? Los casos de corrupción afectan a casi la totalidad de los concejales y cargos de los ayuntamientos de Valencia, de Alicante y de Castellón, a todas las diputaciones, y al Parlament y los antiguos gobiernos de Camps y Fabra. Toda la estructura del PP está carcomida y podrida, hasta el punto de que la actual gestora del partido en Valencia sostiene la necesidad de refundar el PP incluso con unas nuevas siglas. Mónica Oltra, la vicepresidenta del nuevo gobierno, cifraba el saqueo en más de 4.000 millones de euros, y es que mientras miles de estudiantes recibían clase en barracones, o miles de ciudadanos sufrían la degradación y privatización de la sanidad poniéndose cientos de vidas en

peligro, el PP de Valencia se daba la vida padre a costa del dinero de todos.

Crisis y refundación

Bastantes voces del PP se han levantado ya a favor de "limpiar la casa caiga quien caiga"; pero eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Son muchos años disfrutando de un gran poder, de ingresos multimillonarios obtenidos a golpe de chanchullo, para que se abandonen estos métodos sin resistencia. Como en la mafia, todos están implicados, y todos deben obediencia de silencio y lealtad so pena de ser arrastrados. Negocios, mansiones, vacaciones de ensueño, cuentas en Suiza, coches de primera, prestigio social..., es el pegamento que les une. Al fin y al cabo, ¿no es eso el capitalismo? Pero la lucha de clases suele deparar cambios bruscos y repentinos. En un momento determinado, las masas dicen: ¡Hasta aquí hemos llegado!, y lo que ayer pasaba como algo normal para la fiscalía y los jueces, hoy ya no lo es tanto porque de alguna manera hay que calmar el descontento social. Y es más, porque también es una forma de segar las plantas demasiado podridas que con su comportamiento amenazan el negocio general, tanto de los chorizos como de sus amos.

En otras palabras, hay sectores importantes de la burguesía conscientes de que ha llegado el momento de refundar la derecha, adaptarla a los nuevos tiempos. Los primeros pasos ya se han dado con el respaldo a Ciudadanos, pero no está descartado que pasen a mayores y abran la veda dentro del PP, con caras nuevas, discurso nuevo, pero la misma política; en definitiva *Gatopardismo* en estado puro: que algo cambie para que todo permanezca igual.

Las próximas semanas y meses serán decisivos. Entre los estrategas de la burguesía es unánime el apoyo a un gobierno de unidad nacional, pero son pocos los que apuestan a que esté presidido por Rajoy, un hombre arrastrado por el lodo de la corrupción y con una imagen de patán consumado que ya harta. Todo empuja a que si el objetivo es defender la estabilidad y gobernabilidad, los movimientos para construir un nuevo liderazgo de la derecha arrecien en lo inmediato. Que lo consigan fácilmente, sin provocar nuevas crisis y sacudidas, ya es otro cantar.



Imanol Aranbarri

Después de pasar seis años y medio en prisión Otegi en libertad

Después de pasar 2.331 días en prisión Arnaldo Otegi ha recuperado la libertad. A sus familiares y a las más de 200 personas que le esperaban junto a la puerta ha dirigido sus primeras palabras: “Dicen que en España no hay presos políticos. Solo hay que ver esta cantidad de cámaras para ver que sí existen”. Otegi denunció que fue encarcelado por “apostar por la paz” y reconoció el papel de la militancia de la izquierda abertzale por mantener esa apuesta “por encima de las provocaciones”. El compañero de Otegi en este largo cautiverio, Rafa Díez, exsecretario general de LAB, permanecerá en prisión hasta la primavera de 2017.

Las muestras de solidaridad con Otegi y Rafa no han dejado de sucederse en todos estos años. Concentraciones, actos públicos, declaraciones de apoyo desde todos los rincones del mundo, y grandes manifestaciones, como la que tuvo lugar el 17 de octubre de 2015 en Donosti. Incluso en esta ocasión, dirigentes como Alberto Garzón o Pablo Iglesias se han felicitado por su salida de prisión.

El encarcelamiento de Otegi y Rafa Díez ha sido una demostración evidente de cómo la derecha, el aparato del Estado, y también la socialdemocracia, han cercenado los derechos democráticos en los últimos años. Ambos fueron detenidos en octubre de 2009 en la sede central de LAB junto a Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez dentro del caso Bateragune. Tal y como se supo más tarde, estos cinco dirigentes de la izquierda abertzale estaban cerrando el texto base para un debate interno inédito por su calado y sus efectos: la defensa del abandono de la actividad armada. Pero, curiosamente, Arnaldo Otegi fue acusado entre otras cosas de intentar reconstruir el aparato político de ETA.

El PP y el aparato del Estado siguen la vía de la represión

Los 55 folios del auto de prisión, firmados por el exjuez Baltasar Garzón, tenían como conclusión la misma de todos los macrosumarios anteriores: todo se hacía por orden de ETA. Y aunque el mismo auto reconocía que los detenidos en aquel momento estaban planteando que “el proceso negociador necesita de un escenario de no violencia y condiciones democráticas”, no fue ningún obstáculo para acusarles y condenarles. Arnaldo Otegi fue muy claro ante el juez. Habló de cómo había una segunda ponencia alternativa (Mugarri) que apostaba por continuar con una estrategia político-militar y que, por tanto, era “radicalmente distinta a la nuestra”. Según él, “ETA pensaba que era posible acumular fuerzas manteniendo la lucha armada y nosotros pensábamos que no”. Sobre la hipótesis de que ETA pudiera volver a atentar afirmó que “no sólo sería un suicidio político para nosotros, sino que estaríamos quemando un instrumento que se está comprobando que es vital, con magníficos resultados que mejorarán con el paso del tiempo”.

Todo esto demuestra que el objetivo que tenían, en realidad, el aparato estatal y la derecha, con el apoyo del entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, era dificultar la nueva iniciativa política que estaban llevando a cabo importantes dirigentes de la izquierda abertzale. Si nos basamos en los hechos, parece que la derecha y el aparato



del Estado no ven con agrado que ETA abandone la actividad armada, algo que siempre han explotado en su propio beneficio con muy buenos resultados.

La libertad de Arnaldo Otegi y la lucha por el socialismo

Arnaldo Otegi se ha convertido en el referente más importante de la izquierda abertzale y de las bases de Sortu. Es un dirigente carismático que ha estado ya en más de una ocasión sufriendo la cárcel por su labor política. Es innegable que su salida de prisión creará mucha expectativa y entusiasmo en una gran parte de la sociedad vasca.

Otegi tuvo el coraje de afrontar y llegar a la conclusión de que la vía de ETA era errónea, una cuestión política muy delicada para la izquierda abertzale. Pero ahora que este obstáculo ha sido despejado, es necesario continuar sacando conclusiones de la experiencia. En nuestra opinión, hoy es completamente válido afrontar la lucha por el derecho de autodeterminación defendiendo la causa del socialismo. Sólo con un combate frontal contra el régimen capitalista, agrupando las fuerzas de la clase trabajadora y de todos los oprimidos para acabar con este sistema, se puede encarar seriamente la lucha contra la opresión nacional.

Ni el conflicto vasco, ni el catalán, ni el escocés se van a resolver en una “mesa de negociación” ni en el marco del sistema. Aunque la dirección de la izquierda abertzale esté poniendo como ejemplo el referéndum de Escocia y, sobre todo, los acuerdos de la CUP con Convergència, la realidad es que la opresión nacional, y de clase, no encontrarán una solución duradera mientras las causas que la provocan sigan existiendo.

Otegi se ha declarado marxista en numerosas ocasiones, incluso cuando se ha dirigido a los medios de comunicación en las puertas de la cárcel. Pero el marxismo, además de una doctrina revolucionaria, es una guía para la acción, que debe servir para movilizar a los oprimidos hacia su completa emancipación. No tiene mucho que ver con el marxismo las políticas que supeditan la lucha de clases a los acuerdos con la burguesía. El pacto de la CUP con Convergència es precisamente una renuncia a defender una política marxista: colocando al partido de la burguesía catalana en la Generalitat, para que siga con su política de recortes y austeridad, de corrupción y defensa del capitalismo, no se está más cerca de acabar con la opresión nacional. De hecho, Convergència no quiere la independencia, lo único que busca es mantener el poder y asegurar los privilegios de las élites económicas a las que sirve.

Incluso en la hipótesis de una Catalunya independiente capitalista con un gobierno de Convergència, los trabajadores, la juventud y las masas oprimidas seguirían teniendo los mismos problemas de hoy: paro masivo, represión, opresión de clase, y la soberanía nacional seguiría siendo una quimera mientras el gran capital europeo, catalán y español siga decidiendo los aspectos fundamentales que afectan a la vida de millones.

En Euskal Herria la situación es la misma. De la mano de la burguesía vasca, del PNV, de los mismos explotadores que demagógicamente hablan de la liberación nacional como un señuelo para seguir aplicando políticas antiobreras y procapitalistas, jamás obtendremos la libertad. No hay que olvidar que estos mismos políticos llevaron a cabo la represión contra la izquierda abertzale de forma decidida y entusiasta, jamás movieron un solo dedo contra la política de dispersión, y han estado junto al PP en la aplicación de la reforma laboral, la LOMCE o la Ley Mordaza.

Los últimos resultados electorales tanto en la CAV como en Navarra, con el avance de Podemos, señalan también la insatisfacción de una parte muy amplia de la clase trabajadora y la juventud con la política de la dirección de la izquierda abertzale en estos últimos años, centrada en la vida institucional y en la búsqueda incesante de acuerdos con el PNV, y que ha supuesto un abandono claro de la lucha de masas. Otegi tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de romper con esta situación, empujar a la izquierda abertzale por el camino de la movilización y la defensa de un programa revolucionario que vincule la lucha por los derechos democráticos, incluido el derecho de autodeterminación, a la unidad de la clase trabajadora y de los oprimidos por encima de las fronteras nacionales. Este programa de ruptura, de la lucha por el socialismo, para acabar con el poder de los grandes capitalistas, sus monopolios y sus instituciones, sí puede poner en movimiento las fuerzas sociales necesarias para acabar con la opresión nacional de Euskal Herria y de todos los pueblos de Europa.



Beatriz García

Día internacional de la mujer trabajadora 8 de Marzo ¡La lucha sigue!

Se cumplen 105 años de la primera celebración del 8 de marzo como día internacional de la mujer trabajadora. Fue en 1910 cuando en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, la dirigente comunista alemana Clara Zetkin propuso la proclamación de esta fecha como día internacional de la mujer trabajadora con el fin de impulsar y promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio universal para las mujeres. Un año después se celebraba por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza esta jornada de lucha. Al Estado español no llegó hasta 1936, siendo prohibida durante los años de la dictadura franquista.

Tras décadas de pelea por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, la crisis económica a nivel internacional vuelve a situar a la mujer trabajadora como víctima destacada. La violencia machista, los recortes, la ofensiva ideológica de la derecha en alianza con la Iglesia y los sectores más conservadores, son el pan nuestro de cada día en esta sociedad capitalista en decadencia.

Recortes y violencia machista

Durante los últimos cuatro años el gobierno del PP emprendió una guerra contra las familias trabajadoras y especialmente en aspectos que determinan la vida de la mujer; la privatización de escuelas infantiles, eliminación de becas de comedor, reformas laborales y un larguísimo etcétera. El PP ha ido eliminando en la práctica la ya de por sí deficiente ley de dependencia, lo que hace que seamos fundamentalmente las mujeres de familias trabajadoras las que cumplamos en casa el papel que debería cubrir el sector público. Desde 2011 el presupuesto del Programa de Igualdad de oportunidades se ha reducido en un 43% y el programa de prevención integral de la violencia de género un 17%.

Pero por si esto fuera poco los presupuestos generales aprobados para 2016 van más allá. En lo que respecta a la atención a la dependencia el promedio de ayuda es de ¡3 euros al día por persona! Este es el legado político de la derecha que hipócritamente llora lágrimas de cocodrilo cada vez que una mujer es asesinada a manos de su pareja o expareja.

Esta degradación social a la que asistimos, fruto de esta política de recortes y austeridad, es el caldo de cultivo idóneo para que las agresiones contra las mujeres trabajadoras se disparen, tal y como reflejan los datos; el año 2015 fue un año de pesadilla, con 64 mujeres asesinadas, pero en lo poco que va de año se han producido ya otros 11 asesinatos, más del doble que en el mismo periodo del año pasado.

Las denuncias por agresiones sexuales y abusos en los centros de trabajo también se han disparado. Según el Instituto de la Mujer, en 2015 un 15% de las mujeres ocupadas en el Estado español han sufrido acoso sexual o por razón de género en su trabajo, frente al 10% en la UE. Según estimaciones de CCOO, el 95% prefiere no denunciar por miedo a perder su puesto de trabajo. Mientras, el programa contra la violencia de género es un 10,9% inferior este año respecto a 2009 y son dos millones de mujeres las que han sufrido violencia física o económica y cuatro millones la violencia psicológica según la macroencuesta oficial del CIS en 2015. Esta es la auténti-



ca cara de la crisis para millones de mujeres en su día a día, más indefensión y mayor dependencia, una receta acabada para estar atrapadas ante la violencia de género. La independencia económica es condición sine qua non para alcanzar una igualdad real, sin justicia económica es imposible la justicia social, y sin independencia económica hablar de igualdad es una utopía.

La doble opresión de la mujer trabajadora

Bajo el sistema capitalista las mujeres trabajadoras sufrimos una doble opresión, la de clase y la de género. La precariedad, temporalidad, bajos salarios y recortes de derechos cada vez más generalizados se ceban especialmente en nosotras. Sufrimos las peores condiciones

en los centros de trabajo, siendo las primeras en ser despedidas. En esta legislación la brecha de género en cuanto al paro ¡se ha triplicado!

El empleo femenino se concentra en el sector servicios, con una media de salario anual inferior, y concentra la mayor temporalidad y mayor parcialidad laboral obligada, lo que también tira a la baja de los salarios. Según los últimos informes hay dos millones de mujeres asalariadas cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. La brecha salarial también se ha ido acentuando a lo largo de la crisis. De media, las mujeres cobramos un 32% menos respecto al salario de los hombres (6.000 euros menos al año) por realizar el mismo trabajo. En el periodo que va de 2010 a 2013 esta brecha ha aumentado en 2,5 puntos porcentuales. Los efectos a todos los ni-

veles son brutales, sin ir más lejos en las pensiones, que son hoy un 38% inferiores a las de los hombres.

Acompañando esta política de recortes el PP ha desarrollado una ofensiva ideológica sin cuartel en alianza con la conferencia episcopal. Un claro ejemplo fue la reforma reaccionaria de la ley del aborto, que colocaba a la mujer en condiciones de máxima indefensión y opresión, negando, entre otras cosas, el derecho al aborto libre para las jóvenes menores de 18 años.

Mientras se ha negado la enseñanza sexual en los institutos para combatir la violencia machista, y que las jóvenes puedan decidir cuándo y cómo quieren ser madres, en el terreno educativo se aprobaba la LOMCE que, entre otras muchas cosas, financia la educación concertada que segrega por sexos, y se creaba la FP de "actividades domésticas y limpieza de edificios". Devolvemos al mismo lugar en el que el franquismo nos colocaba, dentro de las cuatro paredes de la casa, como "sostén" de la familia y privadas de independencia y libertad para poder trabajar, organizarnos y realizarnos plenamente como cualquier otra persona, ese es el fin último de toda esta ofensiva ideológica de la derecha.

Hoy como ayer, la lucha es el único camino

Pero del mismo modo que toda una generación de mujeres se puso a la cabeza de la lucha contra el franquismo, los últimos cuatro años han vivido una explosión de movilización en la que la incorporación de la mujer a la lucha ha sido protagonista. Baste recordar las imágenes de la Marea Blanca, que paralizó la privatización de seis hospitales públicos en Madrid, la Marea Verde en defensa de la educación pública y contra la LOMCE y el 3+2, la lucha contra los desahucios y el desarrollo de la Plataforma de afectados por la Hipoteca. Frente a la política del pacto social y el abandono de la perspectiva de la movilización por parte de las direcciones sindicales, se ha visto que la organización del movimiento y la batalla en las calles son el único camino útil y efectivo para defender nuestros derechos.

Fue la lucha masiva contra la ley del aborto la que hizo dimitir a Ruiz Gallardón. Fue la movilización del pasado 7 de noviembre contra la violencia machista que inundó las calles de Madrid la que señaló la hipocresía del Gobierno, la ineficacia de la justicia, el machismo en los medios de comunicación. Frente a lo que este sistema ofrece a nuestra clase en general y a las mujeres trabajadoras en particular, levantar la bandera de la lucha por la emancipación de la mujer trabajadora desde una perspectiva de clase, combativa y anticapitalista es tarea indispensable para quienes día a día peleamos por transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de la mayoría.

¡Vitoria, hermanos, nosotros no olvidamos!

3 de marzo de 1976 La sangre obrera conquistó las libertades democráticas

Miguel Mitxitorena

Este 3 de marzo se cumple el 40º aniversario de la masacre que el régimen franquista perpetró contra el movimiento obrero de Vitoria y de todo el Estado. Un movimiento obrero que luchaba por mejores salarios y condiciones de vida, a la vez que por los derechos democráticos que la dictadura había suprimido tras la derrota de los trabajadores en la Guerra Civil. En 1976 el régimen agonizaba cercado por las huelgas que se sucedían en todo el Estado, y particularmente en los centros urbanos donde se concentraba la industria. La burguesía tenía muy poca confianza en sí misma, y más al ver los acontecimientos revolucionarios que se desarrollaron en Portugal con la Revolución de los Claveles. Su prioridad en aquellos momentos era poner a buen recaudo los beneficios amasados de la explotación de la clase obrera durante la dictadura y tratar de salvar al capitalismo por todos los medios.

La descomposición del franquismo se desarrolló en paralelo a la crisis económica y el ascenso de la lucha de clases. Los datos son elocuentes. La evasión de capitales era tremenda (entre enero y mayo de 1976 salieron del país 60.000 millones de pesetas) y la inflación llegó al 20% (el pan subió cerca del 40% en el primer trimestre del año); el desempleo, que afectaba apenas a 300.000 personas en 1973, superaba en 1976 el millón. El proceso de toma de conciencia de los trabajadores, su creciente fortaleza y su oposición abierta a la dictadura franquista se reflejaba en el ascenso de la lucha huelguística: en 1970-72 se registraron 846.000 jornadas perdidas en huelgas, en 1973-75 un millón y medio y en 1976 más de doce millones. La clase trabajadora respondió a los ataques de la burguesía y un régimen agonizante con una lucha heroica. Pero el régimen, que se sentía arrinconado y herido de muerte, sólo podía morir matando.

Plataforma unitaria

En Vitoria, desde enero de 1976, cerca de treinta empresas se habían ido declarando en huelga coordinando sus acciones, eligiendo democráticamente en asamblea a sus representantes, planteando plataformas reivindicativas unitarias y cuestionando así la falta de libertades. Un documento de la UGT de Álava, que en aquellos momentos defendía las posiciones del marxismo revolucionario, señala las reivindicaciones unitarias de los trabajadores:

“1.- Un aumento salarial igual para todos. Este punto era importante. La diferencia entre la subida en tanto por ciento y la subida igual para todos, que en un primer momento puede parecer nimia, entra dentro de la política de la empresa de dividir a los trabajadores. El tanto por ciento supone que quienes tienen un sueldo menor tienen un aumento más pequeño que aquellos que ganan más. Aumenta así la diferencia entre los trabajadores. La respuesta se dio antes de iniciarse la lucha: ‘la vida sube igual para todos’. ‘Si todos luchamos igual todos nos debemos de beneficiar lo mismo’.



2.- 100% del jornal real en caso de enfermedad o accidente.

3.- Jubilación a los 60 años con el jornal real.

4.- Reducción de la jornada laboral.

Los puntos previos a la negociación de estas reivindicaciones se irían concretando a lo largo de la lucha:

- Ninguna empresa negocia si hay un solo detenido en Vitoria.

- Ninguna empresa entra a trabajar si hay un solo despedido en Vitoria.

- No se negocia si no es con los representantes elegidos en asamblea y directamente con la patronal.

Es muy importante resaltar cómo los obreros tomamos conciencia, primero de nuestros problemas en la fábrica y después, a través de las asambleas conjuntas, comprendiendo que la lucha es de todos los trabajadores, asumimos consignas que representan un avance cualitativo de la lucha” (Revista *Marxismo Hoy*, nº 9, Fundación Federico Engels 2001).

Este fue un factor determinante: todo se decidía en las asambleas. En un primer momento en las fábricas donde se elegían las Comisiones Representativas que negociaban con la empresa, y posteriormente coordinándose con las demás empresas movilizadas. Esto fue lo que caracterizó el movimiento de Vitoria: la coordinación de las empresas en lucha que, junto a los jóvenes, las mujeres, los barrios, crearon una estructura de poder obrero que dirigía y organizaba las huelgas, las manifestaciones y acciones, las cajas de resistencia, la asistencia a detenidos, etc.

La masacre

El día 3 de marzo de 1976 toda la clase obrera de Vitoria secundó la huelga general convocada por las Comisiones Representativas de las empresas en lucha. El éxito de la jornada fue abrumador. A las 5 de la tarde en la Iglesia de San Francisco se convocó asamblea general. Una

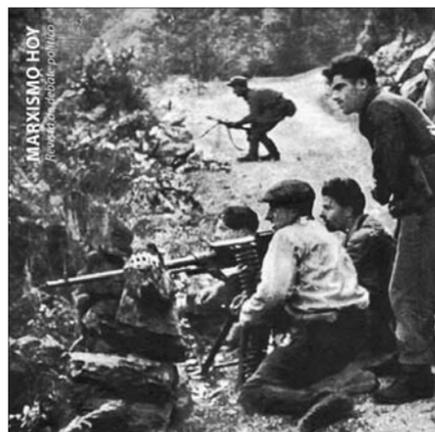
hora antes la iglesia estaba ya repleta, la ciudad absolutamente paralizada y recorrida por barricadas. Desde todos los barrios obreros miles de jóvenes, mujeres y trabajadores abandonan sus casas para acudir a la cita común.

La policía, siguiendo las órdenes de los mandos del Ministerio del Interior, se concentró fuera de la iglesia y planificó la represión. Pronto irrumpieron rompiendo los cristales y disparando al interior botes de humo. La gente se echó al suelo e intentó protegerse. En el exterior la noticia corrió como el fuego: la policía ha cercado la iglesia, ha lanzado botes de humo en su interior y va a asfixiar a miles de obreros. La gente espontáneamente se organizó para liberar a sus compañeros. En el interior, los que ya no pueden más, salen extenuados y medio asfixiados a la calle. La policía ha organizado pasillos para recibir a los trabajadores que intentan salir a porrazos, culatazos y final-

mente organizó una masacre disparando indiscriminadamente: cinco trabajadores mueren por los disparos de las fuerzas policiales y hay más de cien heridos. Mientras el Gobierno, la patronal, el ejército y la policía se felicitaban por la matanza, la clase trabajadora sacaba lecciones de dichos acontecimientos. Fueron concedidas prácticamente todas las reivindicaciones de los trabajadores y durante aquellos años el movimiento obrero de todo el Estado obtuvo las mayores subidas salariales en cuarenta años.

Debemos estudiar las lecciones de una lucha como la de los trabajadores de Vitoria, porque la clase obrera aprende de la experiencia y en estos momentos estamos en una situación en que la burguesía va a por todas. Mientras no derribemos este sistema que nos oprime y nos explota, todo lo que arrancamos lo debemos mantener luchando, si no los capitalistas siempre tratarán de quitárnoslo.

Nuevas publicaciones



**Lucha antifascista
y revolución social**

Europa 1939-1949
(Francia, Italia, Grecia y Yugoslavia)



GanemosCCOO en IBM

Con la lucha hemos logrado que IBM retire el ERE

El 16 de febrero las asambleas de trabajadores de IBM España aprobaron, por amplia mayoría, el preacuerdo alcanzado en los días previos por los representantes sindicales y la dirección de IBM. Con este acuerdo se evitan —al menos por el momento— los aspectos más lesivos de las tres medidas presentadas por IBM España el 1 de septiembre, quedando sin efecto tanto el ERE de despido de 137 trabajadores como la inaplicación del convenio colectivo que pretendía la suspensión desde el 31 de diciembre de 2015 de las aportaciones al plan de pensiones de los trabajadores.

Tras cinco meses y medio de conflicto —con tres jornadas de huelga y concentraciones, una de las cuales obligó a IBM a cancelar su más importante evento anual con sus clientes— la retirada del ERE es un paso adelante, aunque no se han alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado en esta batalla, pues se impone una rebaja salarial del 7,8% y se pierde el plan de pensiones para los nuevos trabajadores.

A nadie en IBM debe quedarle la más mínima duda de que este acuerdo no hubiera sido posible —y de que, por tanto, se habrían aplicado tanto el despido colectivo como la rebaja salarial del 10% y la inaplicación del plan de pensiones— si no es por la negativa tajante de los comités de empresa a aceptar la firma del ERE y por las movilizaciones de los trabajadores.

Los comités de empresa vieron con claridad desde el primer día que la intención de IBM era alcanzar la firma de un ERE lo más dulcificado posible (bajas voluntarias, indemnizaciones superiores al mínimo legal, etc.) para, a través de la aceptación sindical de las causas alegadas por la empresa, facilitar nuevos EREs en condiciones incomparablemente más duras. Por ello, los comités de empresa resistieron no solo intensas presio-



nes patronales, sino las presiones de la cúpula de CCOO, cuyos dirigentes federales recomendaron desde el primer día aceptar el ERE y limitarse a limar sus aspectos más duros. La presión de la cúpula sindical de CCOO llegó hasta tal punto que fue necesaria una protesta muy enérgica de los delegados de IBM para obligar al secretario general, Ignacio Fernández Toxo, a cancelar la entrevista que, de espaldas a sus propios delegados, iba a mantener con la presidenta de IBM España.

La rápida convocatoria de huelgas y concentraciones dejó patente ante la dirección de la compañía que la imposición de las medidas planteadas no iba a ser aceptada pasivamente, y que el negocio de IBM iba a resentirse. La ausencia de tradición sindical en IBM —común a

algunas grandes multinacionales cuyos trabajadores han disfrutado durante años de buenas condiciones laborales— explica la tibieza de la respuesta a las movilizaciones. Pero a pesar de ello, se ha podido comprobar que un sector cada vez mayor de la plantilla es capaz de vencer el miedo a las represalias y no está dispuesto a dejarse pisotear.

El conflicto no está cerrado. La organización y la movilización, más necesarias que nunca

Para GanemosCCOO este acuerdo está muy lejos de ser el final de los ataques de IBM España a las condiciones y derechos de su plantilla. Al contrario, tal como los directivos de IBM publicitan en

sus reuniones con inversores, las condiciones laborales en la compañía van a seguir endureciéndose. El reciente traspaso de 470 técnicos del área de Gestión de Aplicaciones (AMS) a la empresa filial INSA-ViewNext debe interpretarse como un paso inicial para la reducción drástica de los costes salariales imprescindible para alcanzar los objetivos de negocio de IBM.

Los aspectos positivos del acuerdo no pueden ser considerados como definitivamente asegurados, ya que la estrategia definida por la Corporación IBM va a obligar, antes o después, a la dirección de IBM España a poner sobre la mesa nuevos ataques a sus trabajadores. El salvaje recorte que está aplicando desde hace meses a sus trabajadores subcontratados es una advertencia de lo que le espera a una parte importante de su plantilla.

Es por tanto urgente que los trabajadores del Grupo IBM España seamos conscientes de las amenazas que se ciernen sobre su futuro y se preparen para afrontarlas en las mejores condiciones posibles, reforzando su organización sindical y preparándose para que las futuras movilizaciones se lleven adelante con una participación masiva de todos los trabajadores.

Los trabajadores de IBM España hemos conseguido afrontar este primer envite empresarial con un resultado que, aunque no es todo lo que queríamos, presenta bastante más luces que sombras y que, sobre todo, nos ofrece una nueva oportunidad para hacer frente a la empresa desde una posición de fuerza. La organización y la movilización son el único camino para aprovecharla.

Disuelta burocráticamente la Ejecutiva y el Consejo de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León

El pasado mes de noviembre, la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Enseñanza de CCOO en Castilla y León fueron disueltos burocráticamente por la dirección estatal de la Federación de Enseñanza. Así mismo, la secretaria general, Elena Fernández Gutiérrez, fue suspendida de su responsabilidad y vio anulada su liberación. El delito de esta compañera y de los miembros de la Ejecutiva que la han apoyado, no ha sido otro que su petición, por mandato del último Consejo Regional celebrado el 5 de noviembre, de explicaciones sobre unos gastos realizados con una VISA (que alcanzan miles de euros) por el anterior secretario general de la Federación de CyL, y de los que no consta documentación justificativa alguna.

Es asombroso que después de los casos de corrupción, tarjetas *black* y sobresueldos que han salpicado a organismos dirigentes de CCOO se siga manifestando un desprecio tan flagrante por la transparencia y el control democrático de las decisiones que nos afectan a todos.

Envía resoluciones de solidaridad con los compañeros exigiendo la anulación de esta decisión antidemocrática y la restitución en sus responsabilidades de todos los compañeros cesados injustamente.

Bájate la resolución en www.ganemosccoo.org.

¡La lucha sirve! ¡La lucha sigue!

Absueltos

Finalmente y tras más de cinco años de calvario judicial, los ocho trabajadores de Airbus acusados de varios delitos durante su participación en un piquete en la huelga general del 29S de 2010 han sido absueltos. Desde GanemosCCOO queremos felicitar a los compañeros, que se han convertido en un emblema de la defensa del derecho de huelga, y destacar que esta victoria es fruto de su firmeza y de la movilización solidaria de miles de trabajadores en defensa de nuestros derechos democráticos.

Como en otros casos que conocemos, el del joven Alfon o los cientos de sindicalistas que siguen procesados, la campaña de criminalización por parte del aparato del Estado y la derecha ha sido

furibunda. Ahora hay que proseguir y profundizar este camino, generalizar las movilizaciones y coordinarlas para conseguir no sólo la absolución de los procesados y la libertad de los presos, sino recuperar los derechos que nos han arrebatado. Tal como señaló Marcelino Camacho, “el derecho de huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión, reuniéndose; el derecho de asociación, asociándose; y todos estos atributos de la libertad, es únicamente la acción de masas la que puede acabar imponiéndolos”.



Gijón Fabril: ¿Quiebra o fraude empresarial?



Mónica Iglesias

Gijón Fabril es una empresa centenaria dedicada a la fabricación de moldes para envases y de piezas para las máquinas que los fabrican. En enero presentó un ERE de extinción para toda la plantilla y la decisión “irrevocable” del cierre de la fábrica, que coincide con la finalización del contrato que Gijón Fabril tenía con Veralia, su principal cliente y antiguo propietario de la misma.

La historia de cómo Juan Cervera, el actual dueño, llegó a hacerse con la empresa explica también la fecha de caducidad de la misma y arroja bastante luz sobre la “repentina” decisión de echar

el cierre. Así lo explican los trabajadores: “Aunque la empresa tiene más de cien años, en el 97 la compró Saint Gobain y cerró todas las instalaciones que se dedicaban a la fabricación de envases. Sólo se quedó con este taller de mecanizado y, aunque siguió llamándose Gijón Fabril, ya pertenecía al grupo Saint Gobain-Veralia, que tiene más fábricas en Sevilla, Burgos, Zaragoza (...) con este taller lo que hacían era regular el precio de mercado del molde, poniendo ellos los precios, porque si tú me subes los precios, lo voy a hacer en Gijón Fabril a tanto...”.

“Con el tiempo fuimos perdiendo utilidad y decidieron quitarse esa carga así

que la vendieron a Juan Cervera en unas condiciones buenísimas. Ellos asumían el coste de las prejubilaciones y le otorgaron un contrato por diez años en unas condiciones inmejorables”. “La plan tilla antigua cobraba muchísimo más de lo que cobramos nosotros (...) Los que fuimos entrando ya fue con menos categoría, menos sueldo... la diferencia entre unos y otros igual sería de 400 o 500 euros”.

Y de esta forma tan ventajosa ha obtenido estos años jugosos beneficios, que ahora pretende mantener ahorrando costes, liquidando Gijón Fabril y trasladando la producción a otras empresas de su propiedad.

“Nosotros intentamos vincularlos como grupo, pero es muy difícil, tiene los papeles muy bien atados”, nos dice Javo. “Hay que intentar demostrar que es un grupo empresarial y que lo que no está ganando ahora aquí se está ganando allí. Porque siendo un grupo, no podría dejar morir esto”.

Los trabajadores responden

La decisión del empresario está tomada y la ley, a través de la reforma laboral del PP, de su parte. Los trabajadores se irían a la calle con una mínima indemnización de 20 días por año trabajado, que ni siquiera tendría que abonar él, sino que correría a cargo del Fogasa.

Pero, ante este panorama, también los trabajadores han tomado ya sus primeras decisiones y desde el 14 de enero mantienen un retén en la fábrica para evitar que se saque ningún tipo de maquinaria. Mientras, siguen trabajando para sacar parte de los pedidos pendientes. Respecto a cómo van a abordar el cierre, lo tienen claro: “De aquí no vamos a salir hasta que nos eche la policía, ya te lo digo. Y ahora estamos en un plan muy tranquilo, pero sabemos que hay que presionar, hay que movilizar, sacar el conflicto a la calle. Hay que hacer de Gijón Fabril un problema de todo Gijón, de Asturias”. La manifestación del 4 de febrero ha sido un buen comienzo, con más de un millar de personas arrojando a los trabajadores. Y ahora se trata de mantener la unidad de la plantilla y la democracia en la toma de decisiones: “Aquí no se mueve nada sin que lo decida la asamblea de trabajadores. Tenemos claro que los sindicatos son asesores, pero el conflicto, la lucha, es nuestra”.

Por eso, y porque “no nos queda otra, nosotros ya estamos en la calle”, en Gijón Fabril están dispuestos a defender con uñas y dientes los puestos de trabajo. Y cuentan para ello con una ventaja: “que somos jóvenes, que podemos dar mucha caña porque tenemos energía y voluntad”.

Metro de Madrid ¡El derecho a huelga no se toca!

La dirección de Metro de Madrid, controlada por el gobierno de Cristina Cifuentes, ha planteado su plataforma de convenio a los trabajadores. Aparte de intentar recortar muchos derechos adquiridos, destaca la propuesta de que los trabajadores se “comprometan a no ejercitar el derecho de huelga durante la vigencia del convenio colectivo, en los términos y condiciones que se acuerden”. La desfachatez patronal no conoce límites, y ahora pretenden que los trabajadores renuncien no sólo a un derecho que costó mucho conseguir, sino a una de las mejores herramientas de lucha de que dispone la clase trabajadora.

El PP quiere reducir los salarios de sus trabajadores a través de recortes indirectos y dejarles atados de pies y manos frente a nuevos ataques, en los que Metro tiene una larga tradición (no olvidemos las denuncias por la última huelga que reclamaban indemnizaciones millonarias a los trabajadores). Cualquier cesión en este sentido sería no sólo nefasta para los trabajadores del metro, sino que sentaría un peligroso precedente para la clase obrera. Más allá de la contundente negativa que ha planteado el comité de empresa, lo que estos esclavistas modernos se merecen es preparar ya una respuesta contundente que les demuestre quién mueve realmente el transporte de Madrid.

AUZSA en lucha ¡Remunicipalización ya!

Los trabajadores de los Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) continúan en lucha tras más de 70 días de huelga por el incumplimiento que la empresa mexicana ADO Avanza, titular de la contrata, lleva a cabo de forma sistemática.

Las reivindicaciones de los trabajadores son: el cumplimiento del convenio vigente y la municipalización de la empresa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza como única garantía para mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorar el servicio y dejar de saquear de forma innecesaria las arcas públicas.

En este punto la actitud del Ayuntamiento, gobernado por Zaragoza en Común, ha sido realmente decepcionante, asumiendo como propio el viejo argumento tantas veces cacareado por aquellos que durante años han hecho negocio de los servicios públicos, de que el Ayuntamiento no puede municipalizar el servicio por falta de fondos. El alcalde, Pedro Santistevé, tiene que cambiar radicalmente su respuesta ante las demandas de los trabajadores y cumplir con el programa de la remunicipalización con el que ganó las últimas elecciones. Los trabajadores de AUZSA ya han dicho su palabra. Ahora hay que responder a este mandato desde el Ayuntamiento.

Limasa en huelga indefinida

Limasa es una empresa de limpieza de Málaga capital. El ayuntamiento del PP (propietario de Limasa en un 49%) está decidido a acabar con los derechos de la plantilla. Como parte de su estrategia está incumpliendo sistemáticamente la sentencia judicial que restablece derechos suprimidos desde diciembre de 2013, cuando eliminaron la paga de productividad, el descanso de los sábados y empezaron a forzar todas las vacaciones en verano.

El 14 de febrero, 800 de los 1.200 trabajadores y trabajadoras de Limasa se reunieron en asamblea y votaron por amplia mayoría ir a la huelga indefinida desde el 1 de marzo, aun cuando la propuesta del comité de empresa era hacer paros únicamente los sábados.

La reacción del Ayuntamiento ha sido escandalosa. Su portavoz, Mario Cortés, llegó a plantear que la solución pasa por vender la empresa fragmentada en 6 distintas con la intención de segregar a los trabajadores por tareas, y así evitar conflictos colectivos como esta huelga indefinida y poder doblegar a la plantilla más fácilmente.

Si el modelo de privatización del Ayuntamiento de Málaga es el de la recogida de basuras del PP en Madrid, el modelo de lucha de los trabajadores también tiene que ser como la de aquellos.

Ada Colau, ¡así no!

Trabajadores de Metro y autobuses de Barcelona en lucha

GanemosCCOO

Los días 22 y 24 de febrero, coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC), los trabajadores del Metro de Barcelona fueron a la huelga de 24 horas para exigir el fin de la precariedad en Metro y TMB, y la recuperación de las condiciones laborales y salariales perdidas tras cuatro años de alcaldía de CiU. La huelga fue un éxito, con un seguimiento superior al 90%. También hubo huelgas parciales de autobuses los días 23 y 25 de febrero, a pesar de que una parte de los sindicatos del comité de empresa firmaron un preacuerdo (aún sin ratificar) muy alejado de la plataforma reivindicativa aprobada por la plantilla en la última asamblea.

Tras varias semanas en las que las direcciones de Metro y TMB se negaron a negociar con el comité de Metro, finalmente presentaron una propuesta completamente inaceptable para los trabajadores, y que fue rechazada por unanimidad en las asambleas celebradas. El Ayuntamiento de Barcelona en Comú salió públicamente cargando la responsabilidad de la huelga sobre los hombros de los trabajadores. Ada Colau manifestó en rueda de prensa, con el fin de desautorizar la lucha de la plantilla, que los trabajadores de Metro cobran un sueldo medio de 33.000 euros. Al margen de que haya trabajadores que puedan cobrar dicho sueldo, no es así en la mayoría de los casos. Que la alcaldesa de un ayuntamiento del cambio salga de esta manera, insinuando que son unos “privilegiados”, es absolutamente inaceptable. Estos ar-



gumentos son más propios de la patronal y la derecha, la melodía de siempre para tratar de desacreditar las huelgas de la clase obrera. Compañera Ada Colau, ¡así no se logra el cambio!

La propia Ada Colau, en una carta publicada en Facebook, ha querido contestar a las críticas a su actuación en este conflicto reincidiendo en los mismos errores que la han llevado a esta situación. Que se plantee que los trabajadores de Metro

tienen trabajo fijo y a tiempo completo, o que la huelga no está justificada porque la empresa no planteaba recortes, es una argumentación completamente falaz y deplorable. En primer lugar porque trata de señalar a los trabajadores de Metro como una “élite”, buscando enfrentar a los trabajadores precarios contra los fijos y con mejores condiciones. Los únicos privilegiados son los directivos de TMB, que cobran más de 100.000 euros de salario y complementos, el Consejero Delegado de TMB, que cobra 105.000 euros, o los Directores de Servicio, que cobran casi 90.000. Junto a estos cargos directivos hay otros, más de 300, opacos, y denunciados por ello por el comité de empresa, que incluso ha obtenido una sentencia favorable que obliga a hacerlos públicos. Ante la solicitud de los trabajadores de conocer dichos contratos opacos y sus condiciones, se ha indicado por parte de la alcaldía que no se puede por “impedirlo” la ley de Protección de Datos. ¡Increíble! Ada Colau y Barcelona en Comú tienen la obligación de dar luz y transparencia a lo que ocurre en TMB con esta casta de intocables, limpiar la empresa de corrupción y de privilegios inaceptables, y dejar de lanzar acusaciones contra una plantilla que solo defiende lo que es justo.

Atacar a los trabajadores de Metro solo beneficia a la derecha

La otra excusa planteada —que no se han puesto recortes encima de la mesa— demuestra la peligrosa pendiente argumentativa por la que se deslizan los compañeros de Barcelona en Comú, que consideran aceptable todo lo que no supongan recortes directos. Pues no compañeros, los trabajadores quieren recuperar el terreno perdido, y condiciones dignas para todos sus compañeros. No solo se trata de frenar los ataques, sino de pasar a la

ofensiva, como la propia Ada Colau ha manifestado en multitud de ocasiones.

Las afirmaciones de Colau han permitido que rápidamente los medios de comunicación burgueses se lanzaran contra los trabajadores acusándolos de “privilegiados”. La propia patronal catalana, Foment de Treball, ha aprovechado esta situación para volver a exigir una ley de huelga que permita declarar ilegales huelgas como esta. La huelga ha sido además minimizada, especialmente el día 24, al acordarse por la Consejería de Trabajo de la Generalitat unos servicios mínimos completamente abusivos que llegaban al 65%. Incluso el magnate organizador del MWC, se ha permitido hacer un plante a la alcaldesa en señal de protesta por no haber impedido la huelga, poniendo en cuestión que el MWC se siga organizando en Barcelona. Toda esta situación solo ha beneficiado la demagogia de la derecha, que ha aprovechado la ocasión para atacar y minar a Ada Colau y al nuevo ayuntamiento, resaltando sus contradicciones.

En todo momento el aspecto que ha primado ha sido tratar de dar una imagen “responsable” de ciudad ante los multimillonarios organizadores del elitista Mobile World Congress, donde la entrada más barata era de 749 euros. Gobernar pensando en las inversiones de los capitalistas y en no causarles molestia alguna, tal y como ha ocurrido en este caso, lleva a una dinámica endiablada que obliga a aceptar toda la lógica del sistema. Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona en Comú se han equivocado, y deben reflexionar y rectificar. La gestión de la huelga no ha fortalecido sino que ha debilitado al nuevo ayuntamiento alejándolo de la base social que lo defendió y aupó al poder. Es la hora de los hechos, y no solo de las palabras. Ada, compañera, recuerda el grito de guerra que te permitió llegar allí: ¡Sí se puede! ¡Ahora, sí se debe!

Nace la Coordinadora de Trabajadores de Tarragona

En Tarragona durante el último año hemos sufrido una auténtica ofensiva por parte de la patronal: despidos, EREs, modificación de condiciones, etc. Cada semana enfrentamos nuevos ataques. Los últimos han sido el cierre de Covestro-Bayer en la petroquímica y de Ercros en Flix, sumando más de 600 despidos. Pero la lista es larga: Emte, Navec, Rodisola, Denion. En algunas empresas se han dejado de cobrar las nóminas o se cobran con retraso, y en otras como SA Reverté se persigue a aquellos que tratan de ejercer sus derechos sindicales, como ocurría en los tiempos del franquismo.

Un grupo de trabajadores de diferentes empresas y sindicatos hemos decidido coordinarnos para enfrentarnos a esta oleada de ataques. La idea surgió al calor de la visita de un diputado de Podemos interesado por los problemas laborales, lo que supuso que trabajadores de diversas empresas coincidiéramos en una reunión donde pudimos trasladarle y discutir los problemas que enfrentábamos. En una siguiente reunión se acordó elaborar un manifiesto —que defiende un modelo sindical de clase y combativo y rechaza la política del “mal menor” que lleva a ceder a las pretensiones de la empresa sin luchar hasta el final— que nos sirviera para dar a conocer esta iniciativa y agrupar a todos aquellos comités, delegados, afiliados o trabajadores sindicados o no, que necesiten responder a los ataques de la patronal.

No queremos formar un nuevo sindicato, sino coordinar los esfuerzos titánicos que día a día nos vemos obligados a desarrollar. Mediante esta iniciativa queremos que cualquier trabajador, cualquier plantilla pueda tener un instrumento para que su conflicto se difunda, para encontrar apoyo, para discutir qué pasos y tácticas seguir, y para coordinarse con otros compañeros y sectores desarrollando una auténtica red de solidaridad.

Secciones sindicales de CGT en EMTE-Comsa y de CCOO en Reverté SA - Comités de Empresa de CCOO en Refratechnik Cement y Abantia-Denion y de CGT en Rodisola

13 y 14 de abril, huelga de estudiantes

► **¡La enseñanza pública no se vende, se defiende!**

► **¡Fuera la LOMCE y el 3+2!**

El Sindicato de Estudiantes convoca a todos los estudiantes de enseñanza secundaria, FP y universidad a una huelga general los días 13 y 14 de abril para exigir la derogación inmediata de la LOMCE, el Decreto 3+2 y todos los recortes educativos del gobierno del PP.

A dos meses de la celebración de las elecciones generales, la educación pública se encuentra en una situación de emergencia. Golpeada por recortes de miles de millones de euros, el despido de miles de docentes, por la subida escandalosa de las tasas universitarias y la reducción de las becas, y sometida a contrarreformas franquistas y clasistas como la LOMCE y el 3+2, los estudiantes no vamos a aceptar de ningún modo que se traicione la lucha de la Marea Verde.

El Sindicato de Estudiantes quiere manifestar su categórico rechazo a las maniobras y propuestas de Pedro Sánchez y el equipo negociador del PSOE que son una completa burla al movimiento de millones de estudiantes, profesores y padres. Sus declaraciones confirmando que no derogarán la LOMCE y el 3+2, desdiciéndose de sus promesas, no hace más que el juego a la derecha y a todos aquellos que han hundido el derecho a una educación digna y gratuita para los jóvenes que pertenecemos a familias trabajadoras. Pedro Sánchez y la dirección del PSOE están encantados con el pacto que han alcanzado con Ciudadanos, formación a la que hasta hace muy poco tachaban de derecha 2.0. Que no olvide Pedro Sánchez que con este pacto traiciona a sus votantes y a la juventud. Si él no tiene principios y pretende vender la enseñanza pública a los representantes del Ibex 35, los estudiantes sí los tenemos y seguiremos luchando por lo que es justo: una enseñanza pública, digna, gratuita, democrática y de calidad, sin recortes y leyes franquistas, y a la que todos los jóvenes podamos acceder en igualdad de condiciones.

Llamamos a la juventud a la rebelión en las calles, a vaciar las aulas el 13 y 14 de abril, a organizar comités de lucha en todos los institutos y facultades. No vamos a permitir que en negociaciones clandestinas, en despachos y a espaldas de todos nosotros, se venda de nuevo la enseñanza pública.

Llamamos también a toda la comunidad educativa, a los padres y madres, a los profesores, a sus organizaciones y sindicatos de clase, a confluír en esta movilización y volver a levantar la bandera de la Marea Verde, dejando muy claro al futuro gobierno, sea el que sea finalmente, que no hemos luchado estos años para que todo siga igual. ¡No lo vamos a permitir!



SUSCRIPCIÓN anual
 (11 números) **20€**
 40 años de **PRENSA OBRERA**

Envía tus datos a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web o utiliza el código QR



Edita: AC El Militante · DL: M-14564-1989

CONTACTA CON NOSOTROS

ANDALUCÍA: Cádiz 678 940 435 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Málaga 952 276 563 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 697 338 376 · ASTURIAS: 985 550 933
 • CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325
 · Girona 657 212 367 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 945 231 202 · Gipuzkoa 669 034 163 · Nafarroa 635 919 738 · Bizkaia 664 251 844 · EXTREMADURA: 638 771 083
 GALIZIA: Compostela 679 500 266 · A Coruña 639 577 912 · Ferrol 626 746 950 · Vigo 636 217 248 · MADRID 914 280 397 · PAÍS VALENCIA 685 098 482
 www.elmilitante.net · elmilitante@elmilitante.net · Twitter: @_elmilitante · Facebook: El Militante - Corriente Marxista Revolucionaria